



GRUPO
Propuesta
CIUDADANA

El estallido social en Cusco

Nuevas demandas, nuevos actores
(de diciembre de 2022 a febrero de 2023)

Luis Nieto Degregori



El estallido social en Cusco
Nuevas demandas, nuevos actores
(de diciembre de 2022 a febrero de 2023)

Presidente del Consejo Directivo

Javier Azpur Azpur

Coordinador ejecutivo

Federico Tenorio Calderón

Autor

Luis Nieto Degregori

Corrección de estilo

Eleana Llosa Isenrich

Cuidado de edición

Nelly Carrasco Camones

Diseño y diagramación

Mario Popuche Llontop

Ilustración de carátula

Luis Mauricio Delgado Castillo

Edición digital

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-10573

Grupo Propuesta Ciudadana

Dirección: Jirón María Parado de Bellido N° 150, Magdalena del Mar, Lima

Teléfono: 998 342 992

Página web: www.propuestaciudadana.org.pe

Correo electrónico: contacto@propuestaciudadana.org.pe

Primera edición: octubre de 2023

Con el apoyo de:

**Ford
Foundation**

Índice



1 Introducción



A raíz del fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo y tras la designación en el cargo de Dina Boluarte en diciembre del año pasado, el país ha presenciado un estallido social con un altísimo costo en vidas humanas, pérdidas económicas y deslegitimación de sus instituciones, además de una polarización social que ha desnudado fracturas que nuestra república arrastra desde su fundación hace doscientos años, como la exclusión social, el racismo y el clasismo.

La región del Cusco y el sur del país son espacios donde se ha vivido con más fuerza las movilizaciones sociales y protestas, incluidos varios días de paro seco (llamado así por la ausencia casi total de transporte y comercio en las ciudades) y bloqueo de carreteras que generaron desabastecimiento de comestibles y combustibles como gas de uso doméstico, gasolina y diésel, sin mencionar el encarecimiento del costo de vida.

Un hecho inédito que ha sido advertido por los analistas políticos y la prensa tanto a nivel regional como nacional es que el protagonismo de las movilizaciones sociales lo han tenido los sectores campesinos, comuneros e indígenas. En el caso particular del Cusco, este protagonismo se tradujo en un sinnúmero de marchas de pobladores y pobladoras de diversas provincias y distritos de la región hacia la ciudad del Cusco, donde hacían largos recorridos por sus calles y plazas coreando sus principales demandas: renuncia de la presidenta Boluarte, cierre del Congreso, elecciones anticipadas y convocatoria a una asamblea constituyente. Una exigencia que también se escuchaba al comienzo de las movilizaciones era la de reposición del presidente Castillo, pero esta fue dejada de lado a medida que transcurrían las semanas.

No menos importante fue el envío de numerosas delegaciones hacia la ciudad de Lima para participar en la así llamada “Segunda marcha de los cuatro suyos” o también “La toma de Lima”, esto para el jueves 19 de enero de este año 2023. El mecanismo de financiación de todas estas movilizaciones y traslados fue el de las colectas solidarias y las ollas comunes. En plazas de provincias y en la plaza Túpac Amaru de la ciudad del Cusco, se instalaron carpas para la recepción de donativos tanto en víveres para las ollas comunes como en dinero para los traslados y la atención de heridos a medida que casos de esta naturaleza se fueron dando.

Se ha señalado ya que las demandas de los sectores sociales movilizados son de carácter netamente político, no por ello menos legítimo. Esta parece haber sido la razón principal del escalamiento de las protestas hasta alcanzar la magnitud de un verdadero estallido social. Se debe entender que el gobierno de la presidenta Boluarte se negó en todo momento a establecer espacios de diálogo para discutir una agenda política e insistió –y sigue insistiendo– en que los sectores sociales movilizados deben presentar demandas sociales que el gobierno sí está dispuesto a discutir. Es más, se hizo un esfuerzo desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otros ministerios para tratar de constituir espacios de diálogo de esta naturaleza en las regiones, los que fueron ignorados por quienes protagonizaron las manifestaciones.

Un análisis de la situación que se ha enfrentado en el Cusco y en el país puede ayudar no solo a entender a cabalidad lo ocurrido, sino a orientar de manera apropiada el trabajo de los organismos no gubernamentales (ONG) y en general de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado en la presente coyuntura. Para ello, en el presente documento, elaborado entre los últimos días de febrero y la primera quincena de marzo del presente año 2023, se empezará trazando una cronología de los hechos para luego presentar entrevistas realizadas a dirigentes sociales, de preferencia de organizaciones indígenas o campesinas, de las provincias de Canchis, Calca, La Convención y el propio Cusco. Estas provincias han sido escogidas porque son los lugares con las movilizaciones más fuertes y prolongadas de la coyuntura.

Se presentará, asimismo, entrevistas con dirigentes de gremios empresariales del Cusco del sector turismo, el más perjudicado por las paralizaciones, bloqueos de carreteras y, sobre todo, por la suspensión del

servicio de trenes a Machupicchu y el cierre eventual del aeropuerto de la ciudad del Cusco. Estas entrevistas se complementarán con un análisis de los comunicados emitidos por la Cámara de Comercio del Cusco y la Cámara Regional de Turismo del Cusco (Cartuc) frente a la coyuntura. Asimismo, se analizará la postura de las principales autoridades (gobernador regional y alcalde del Cusco) en base a los pronunciamientos emitidos en relación a la coyuntura.

Finalmente, se hará un breve recuento de la vulneración de los derechos humanos durante las protestas y tras la judicialización de algunos casos, y se presentará algunas conclusiones y recomendaciones sobre maneras de mejorar la participación política de las comunidades indígenas y las poblaciones rurales en la política regional y nacional.



Foto: Wilson Chilo

2 Cronología de los sucesos y su dinámica social

En algunas de las provincias a las que hacemos seguimiento en el presente informe, las movilizaciones sociales empiezan el mismo 7 de diciembre, tras la vacancia de Pedro Castillo por el Congreso. Así en Canchis, según información de Royer Galindo, secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis (Fudic), el miércoles 7 por la tarde se da una reunión en la plaza de Sicuani y se convoca una marcha para el día siguiente con la intención de constituir un comité de lucha. El día 9, en efecto, dicho comité quedó conformado con la presidencia de Humberto Apata Quispe, dirigente del distrito de Checacupe, y se acordó asimismo iniciar una huelga indefinida desde el día lunes 12 de diciembre.

Por otra parte, en su edición del día viernes 9 de diciembre, *El Diario del Cusco* (en adelante DC) da cuenta en su portada de protestas en el Cusco y Sicuani, pormenorizado que

[...] en la capital canchina la jornada se inició en el puente Arturo y concluyó en [la] plaza principal, mientras que en Cusco la manifestación se concentró en la Plaza Mayor y se anuncia que el lunes 12 la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) desarrollará [una] marcha de protesta.

El 10 de diciembre, este mismo periódico informa que “las bases sociales de La Convención decretan huelga indefinida” y reitera que desde el lunes 12 en el Cusco habrá protestas continuas.

El martes 13 de diciembre, la noticia de portada del DC da información detallada de lo que ocurre en la ciudad del Cusco:

Ayer se desarrolló contundente movilización de organizaciones de la sociedad civil por el Centro Histórico. Medidas de fuerza se incrementan en Cusco. Diversos sectores asumen paralizaciones y desde el jueves 15 [anuncian un] paro nacional indefinido exigiendo cierre del congreso y adelanto de elecciones generales. Transportistas de servicio urbano suspenderán servicio mientras que el transporte interprovincial desde y hacia la Ciudad Imperial está interrumpido.

Esta última información sobre la suspensión del servicio de transporte interprovincial es corroborada por las declaraciones de Royer Galindo del Fudic, quien manifestó que desde el 12 de diciembre piquetes conformados mayormente por organizaciones comunales bloquearon la carretera del Cusco a Puno desde los distritos de Pitumarca y Combapata hasta el de Maranganí. Cabe señalar que estos bloqueos en diversas partes de la provincia de Cuzco fueron los que a la larga generaron la aguda escasez de alimentos y combustibles en la ciudad del Cusco que se empezó a notar desde la segunda quincena del mes de enero.

En los días siguientes, las movilizaciones tanto en la ciudad del Cusco como en las provincias de la región continuarían con mucha fuerza y se presentarían los primeros actos de violencia con intentos de llegar al aeropuerto de la ciudad y con la quema de peajes en provincias. El DC da cuenta de esto en su edición del 15 de diciembre:

Nueva jornada de violencia en Cusco. Dirigentes deslindaron con violencia extrema y señalan que no son parte del movimiento popular que pide el cierre del congreso y adelanto de elecciones. Pero ayer se prendió fuego a [la] municipalidad de Espinar, peajes de Ancahuasi y Huillque y se volvió a intentar ingresar al aeropuerto del Cusco.

En la portada del mismo día, el DC informa que “dirigentes de rondas campesinas de Quispicanchis exigen que Pedro Castillo retorne a la presidencia” y puntualiza seguidamente: “No quieren nuevas elecciones sino renuncia inmediata de Dina Boluarte”.

El 15 de diciembre es una fecha luctuosa de este momento en el país por la muerte de diez manifestantes en los disturbios que se produjeron alrededor del aeropuerto de la ciudad de Ayacucho. En el caso de la región del Cusco, estos dramáticos sucesos fueron el detonante para que más provincias se incorporarán activamente a las movilizaciones en

contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República. Así, según información de Faustino Pacco Pacco, comunicador social de la comunidad de Paru Paru de las alturas de Písac, son los sucesos de Ayacucho los que empujan a las doce comunidades campesinas del distrito a organizarse y a decidir tomar el puente de Písac para así bloquear la carretera Cusco-Calca.

Es muy importante señalar que la ciudad del Cusco ya estaba presenciando una dinámica social inédita en la historia reciente: la llegada desde provincias de numerosos contingentes de comuneros que recorrían pacíficamente toda la ciudad. Videos y fotografías de tales marchas empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia en redes sociales como Instagram y Facebook, como uno que transmitió en vivo el 14 de diciembre la fotógrafa Ninoska Montúfar Becerra en Instagram, donde se percibe claramente el origen indígena de los manifestantes y las banderolas que los identifican, como la de “Rondas campesinas originarias independientes Tinquí Ocongate Huayna Ausangate”. Una manifestación aun más numerosa fue la protagonizada el 15 de diciembre por campesinos comuneros de la provincia de Paucartambo, que también quedó reflejada en las fotografías de Ninoska Montúfar subidas a Instagram ese mismo día.

Otro factor a tener en cuenta es que entre el 13 y el 16 de diciembre, la paralización de actividades en la ciudad del Cusco, que incluía ausencia de transporte público urbano y cierre de todos los mercados, fue de una magnitud que no se había visto en muchísimo tiempo. De esto da cuenta el DC en su edición del lunes 19 de diciembre, cuyos titulares de portada resumen en cierta manera lo que se estaba viviendo en la ciudad:

Movilizaciones continuarán y se reitera que serán pacíficas. Organizaciones sociales del Cusco ratifican que continuarán medidas para exigir cierre del Congreso y elecciones adelantadas y señalan que se hará frente con rigor a los “infiltrados”. Mientras tanto continúan suspendidas labores escolares, hay desabastecimiento en mercados. Por su parte, taxistas y transporte masivo señalan que brindarán servicios.

El desabastecimiento, así como la cercanía de las fiestas navideñas y de fin de año, fueron decisivos para que se abriera un paréntesis en las movilizaciones. En el caso de la ciudad del Cusco, las organizaciones



Bloqueo a la salida de Calca.

sociales anunciaron una tregua entre el 22 de diciembre y el 3 de enero, como informa el DC en su edición del primer día de la misma. En provincias como Canchis, según declaraciones del dirigente del Fudic Royer Galindo, lo acordado para las mismas fechas fue dar pase humanitario en la carretera del Cusco a Puno.

El 3 de enero, tras la pausa navideña, las paralizaciones y protestas fueron retomadas con fuerza en la ciudad del Cusco y en toda la región. Un paro seco los días 4 y 5, sin transporte público y nuevamente con cierre de mercados, fue la primera acción de una dinámica que se mantendría en las siguientes semanas, con algunos picos de los que oportunamente daremos cuenta. Sobre esto informa el DC en su edición del 5 de enero:

Piquetes se movilizaron en calles de la Ciudad Imperial y hubo bloqueos en diversas carreteras de la región. Paro se desarrolló sin hechos de violencia. Primer día de la huelga exigiendo renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, nueva constitución fue diferente a lo ocurrido en diciembre. Carreteras fueron bloqueadas en Anta, Canchis, Valle Sagrado, mientras que en Espinar no se acató medida de fuerza al celebrar su Exporeyes.

La masacre ocurrida en el aeropuerto de Juliaca el 9 de enero, que arrojó un saldo de 19 civiles fallecidos, tuvo fuertes repercusiones en las protestas tanto en la ciudad del Cusco como en la región. El 10 de enero, como da cuenta "Pulso regional" (en adelante PR), un espacio periodístico en redes sociales, delegaciones de Canchis, Paruro, Canas y Calca, conjuntamente con manifestantes de organizaciones sociales de la propia ciudad, protagonizaron fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden en la avenida 28 de Julio. Los manifestantes pugnaban por dirigirse al aeropuerto y la policía les bloqueaba el paso. Tras varias horas, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, se supo de dos jóvenes heridos con proyectil de arma de fuego y de un policía a quien le impactó una piedra en la cabeza. Hubo además hasta siete detenidos.

El 11 de enero, la situación se volvió aun más tensa. A las delegaciones de campesinos comuneros de las provincias ya mencionadas en el párrafo anterior, se sumaron otras de La Convención, Anta, Acomayo y Quispicanchis, según informa PR en su edición del día siguiente. Los enfrentamientos se produjeron de nuevo debido al intento de los manifestantes de dirigirse al aeropuerto y esta vez el saldo fue el fallecimiento de Remo Candia, presidente de la comunidad Urinsaya Collana de la provincia de Anta. Hubo además 57 heridos, la mayoría de ellos civiles y 3 de cierta gravedad. Al final del día, por lo demás, se dieron actos de vandalismo, con un ataque, según PR, al terminal terrestre de la ciudad, que dejó 30 oficinas dañadas, y al hotel de cinco estrellas Marriott, que se tradujo en la ruptura de macetas y puertas de vidrio de su fachada.

En los días siguientes, organizaciones campesinas, como la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco (Fartac), deslindaron con los actos de vandalismo y al mismo tiempo hicieron los primeros anuncios del viaje de delegaciones a Lima, para participar tanto en la así llamada "Segunda marcha de los cuatro suyos" como en la paralización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Según la información de la prensa revisada para el presente informe, la primera delegación en partir fue la de la provincia de Canchis, el día lunes 16 de enero. De esto se da cuenta en la portada del DC correspondiente al 17 de enero, que ofrece una fotografía de su salida. La delegación de Calca, por su parte, partió la noche del 17 de enero.

El 19 de enero los ojos de todo el país estuvieron puestos en las marchas protagonizadas por las delegaciones llegadas a Lima de diversos lugares, sobre todo de las regiones del sur. En la ciudad del Cusco, por su parte, se vivió una nueva jornada, bastante contundente, de paro seco y de movilización. En su portada del 20 de enero, el DC da cuenta de estos hechos. Se informa de enfrentamientos en la ciudad, nuevamente cerca al aeropuerto, con un saldo de once heridos, así como de un intento de ataque al supermercado Tottus en el distrito de San Sebastián. Otro titular informa sobre un ataque que sufrió en Chumbivilcas la mina Constanza de la empresa Hudbay, con el saldo de varios vehículos quemados. Esta noticia por lo demás rápidamente se propagó a nivel nacional, como, por ejemplo, en la página web de RPP, que la consignó así:

Vehículos como retroexcavadoras, volquetes, minibuses y camionetas que estaban estacionadas en las instalaciones de la minera Hudbay, ubicada en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, fueron atacados por manifestantes que ingresaron al lugar.

Una tercera noticia del DC, del 20 de enero, dio cuenta finalmente de que se había agravado el desabastecimiento de gas y alimentos en el Cusco.

Otro hito en las movilizaciones sociales en el Cusco tuvo como detonante el ingreso de las fuerzas del orden a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la mañana del sábado 21 de enero y la detención de casi dos centenares de personas, la mayoría de ellas integrantes de las delegaciones desplazadas a Lima desde diversas regiones. Ese mismo día, en horas de la tarde, la Federación Universitaria Cusco (FUC) realizó una nutrida marcha por las calles y plazas de la ciudad en solidaridad con los jóvenes antonianos que estaban alojados en San Marcos. Esta organización estudiantil acordó, asimismo, enviar una nueva delegación a Lima para que se sume a la que había viajado anteriormente.

Marchas universitarias volvieron a darse el martes 24 de enero y el viernes 27, esta última llamada de la solidaridad, pues terminó en la plazoleta de Santiago, donde se desarrollaba una actividad cultural para recaudar fondos. Una peculiaridad de estas marchas fue que se realizaban de forma simultánea a las movilizaciones de delegaciones de campesinos comuneros que seguían llegando a la ciudad, pero no en forma conjunta. Se apreciaba pues que no existía una coordinación entre las distintas

organizaciones que se movilizaban exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

El fin de semana del 28 y 29 de enero, ante la crítica escasez de alimentos y combustibles y haciéndose eco del malestar de la población de la ciudad, las organizaciones sociales de la región acordaron levantar temporalmente el bloqueo de carreteras, particularmente en Andahuaylillas, al sur del Cusco, y en la provincia de Anta, en las vías hacia Arequipa y Puno, y Nazca y Lima, respectivamente. Sin embargo, desde el martes 31 de enero nuevamente las movilizaciones se hicieron sentir con mucha fuerza en las calles de la ciudad, en particular de las delegaciones del distrito de Písac por la mañana y de las trabajadoras del mercado de Cascaparo por la tarde.

El martes 31 de enero se produjeron algunos hechos de violencia en la avenida de la Cultura, arteria principal de la ciudad del Cusco, donde algunos manifestantes atacaron unidades de transporte urbano. Varios usuarios de redes sociales registraron incluso el momento en que una persona arroja una piedra a la ventana de un autobús y la rompe, lo que obliga a los pasajeros a abandonar rápidamente ese vehículo. A raíz de estos sucesos, cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande de Písac fueron detenidos. En su defensa, como veremos en el acápite dedicado a las vulneraciones de los derechos humanos, las autoridades comunales manifestaron que la movilización fue infiltrada por policías vestidos de civil, quienes azuzaron a los jóvenes comuneros.

El jueves 2 de febrero, la ciudad vivió una nueva jornada de paro seco, con ausencia total de transporte público urbano e incluso de vehículos particulares, así como con cierre de mercados y comercios ubicados en las calles principales. De hecho, este día se vivió uno de los picos de las movilizaciones por la presencia en la ciudad de nutridas delegaciones de provincias y distritos, como La Convención, Maras y Ccorcca, entre otros. Además, el desabastecimiento de alimentos y combustibles se encontraba también en su punto más álgido, con la mayoría de servicentros de la ciudad cerrados.

Para el jueves 9 de febrero, se convocó a un nuevo paro seco, pero esta medida no tuvo la contundencia de las anteriores. Algunas empresas aisladas brindaron servicio de transporte y, ante la ausencia de piquetes, numerosos vehículos particulares circularon por las calles de la ciudad.

Asimismo, los mercados funcionaron con normalidad y lo mismo ocurrió con la mayoría de establecimientos de comercio. Las marchas incluso fueron solamente de organizaciones sociales de la ciudad del Cusco y convocaron a un número reducido de manifestantes. Se debe añadir, además, que entre el 2 y el 9 de febrero la presencia de delegaciones de provincias en las calles de la ciudad disminuyó notoriamente.

Entre tanto, en varias provincias de la región se vivía una situación similar en relación al relajamiento de las medidas de protesta. Así, en Canchis, según información del periodista Denis Hualla Vega y de otros espacios alternativos de redes sociales, el domingo 5 de febrero se dio pase humanitario en las carreteras que hasta ese día habían permanecido bloqueadas. De hecho, ese mismo día el citado comunicador publicó fotografías de los camiones varados en Condoroma, en las alturas de Espinar, mencionando que se trataba de casi un centenar de unidades vehiculares. Dado que el bloqueo se realizaba sobre los 4700 msnm, se ve en las imágenes los camiones cubiertos de nieve en medio de una espesa neblina.



Paro seco indefinido en el pueblo de Machu Picchu para exigir la renuncia de Dina Boluarte.

El miércoles 8 de febrero, se realizó una reunión en el distrito de Tinta, en Canchis, en la que representantes de las organizaciones de los distritos de la provincia y de distritos colindantes de Quispicanchis, Acomayo y Canas acordaron dar pase humanitario en las carreteras cada quince días, en fines de semana. Sobre esto se informó al término de la reunión, en entrevista del medio alternativo Revista Rotativa Cusco, compartida por Denis Hualla Vega.

El 15 de febrero, en una reunión que tuvo lugar en Combapata, también en Canchis, se decidió asimismo dar paso a los vehículos cada fin de semana, empezando por el sábado 18 y el domingo 19. Se acordó al mismo tiempo retomar el paro indefinido el lunes 20. Sin embargo, el domingo 19 las organizaciones de Canchis y de provincias cercanas se reunieron de nuevo, esta vez en Sicuani, y acordaron levantar de manera definitiva los bloqueos de carreteras. Dicho acuerdo, en la práctica, significó una vuelta a la normalidad en la zona.

En la provincia de Calca, por otra parte, la relajación de las medidas de protesta, de acuerdo a una etnografía de la socióloga Eleana Llosa (2023), residente en la capital provincial, comenzó hacia el jueves 9 de febrero, cuando en la práctica no se acató el paro regional. El sábado 10, sin embargo, según la misma fuente, que cita un medio alternativo de Facebook –llamado “ANC Cusco”–, da cuenta de una movilización de trabajadoras del mercado a la fiscalía provincial por una notificación de la Fiscalía de Prevención del Delito que exhortaba a algunos dirigentes a abstenerse de participar en movilizaciones y medidas de lucha.



Foto: Eleana Llosa

3

La voz de las dirigencias



Se ha hecho referencia en la introducción a este documento al protagonismo en las movilizaciones de los sectores campesinos, comuneros e indígenas. Para poner esta afirmación en contexto, repasemos someramente los datos del censo de población de 2017 en lo referido a autoidentificación étnica, explicada así: “la forma como una persona se percibe a sí misma tomando en cuenta sus costumbres y antepasados” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2018). En este censo, en la región Cusco el 74,8% de la población mayor de 12 años se autoidentifica como quechua y el 18,7% como mestiza. La población que se considera blanca es apenas el 1,3%, mientras que los indígenas amazónicos llegan al 0,7%.

En lo referido a las provincias tomadas en cuenta para este análisis, Canchis y Calca reportan porcentajes aun mayores al regional de población quechua, con el 88,97% y el 86,41% respectivamente. En tanto el Cusco y La Convención arrojan los porcentajes más bajos: el 63,02% y el 56,91% respectivamente. Cabe señalar que, salvo estas dos últimas provincias, las once restantes del departamento tienen porcentajes de población que se autooientifica como quechua que fluctúan entre el 82,02% de Urubamba y el 94,22% de Canas.

Los datos sobre lengua materna de la región, referidos a la población de cinco y más años de edad, corroboran el panorama arriba esbozado, pues el quechua es la lengua materna del 55,25% de la población, mientras

el castellano lo es del 41,83%. En Calca y Canchis, los porcentajes de población con el quechua como lengua materna se elevan al 72,63% y el 65,93% respectivamente.

El aspecto que queremos hacer notar con esta información es que la población indígena de la región del Cusco no es solo la rural campesina, sino también la urbana de sectores populares. En datos censales, esto se expresa así: el 67,2% de la población urbana regional se autoidentifica como quechua, en tanto el 25,5% se considera mestiza. La población urbana que se autoidentifica como blanca sube del 1,3% ya consignado al 1,7%.

3.1. Canchis

Royer Galindo Laime es el secretario general del Fudic y al mismo tiempo vicepresidente del Comité de Lucha de la provincia, comité que se conformó expresamente para enfrentar esta coyuntura en la asamblea pública del 9 de diciembre, en la que participaron quinientas a seiscientas personas. En esa ocasión, la presidencia del Comité de Lucha recayó en Humberto Apata del distrito de Checacupe y la vicepresidencia, en el profesor Claudio Checcori de Sicuani. Tras la renuncia del primero, el profesor Checcori asumió la presidencia y Royer Galindo, la vicepresidencia. Este último es un técnico en contabilidad del distrito de Checacupe.

Royer Galindo recuerda que el 7 de diciembre muchas personas se reunieron de manera espontánea en la plaza de Sicuani y allí se convocó a una movilización para el día siguiente. Fueron entre doscientas y trescientas personas las que marcharon desde el puente Arturo, en la salida de la ciudad con dirección a Puno, hasta la plaza con la intención de conformar el mencionado Comité de Lucha. Como ya se señaló, este quedó constituido al día siguiente y su primera medida fue declarar una huelga indefinida en la provincia de Canchis a partir del lunes 12 de diciembre. Esta medida de lucha, según el entrevistado, estuvo acompañada de piquetes que bloquearon la carretera Cusco-Puno desde los distritos de Pitumarca y Combapata, más cercanos al Cusco, hasta el de Maranganí.

Como en el caso de la ciudad del Cusco, esta primera etapa de las protestas se prolongó hasta el 21 de diciembre, cuando se declaró el pase

humanitario en las carreteras hasta el 4 de enero, por las celebraciones de navidad y año nuevo. En enero, manifiesta Royer Galindo, grupos organizados de la provincia de Canchis se trasladaron hasta la ciudad del Cusco para marchar por sus calles y plazas. A pesar de la distancia de 140 kilómetros al Cusco, llegaron a viajar hasta unas quinientas personas.

El siguiente acuerdo de las organizaciones de la provincia fue participar en la así llamada "toma de Lima", para lo cual, previa colecta de fondos entre las organizaciones populares y la población de la provincia, se armó una primera delegación de 186 personas y una segunda de 79. La delegación canchina fue recibida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a las 3 de la mañana del 18 de enero por integrantes de la Federación de Estudiantes. Allí permaneció dos noches y tres días, hasta que en una asamblea en que participaron delegaciones de Ayacucho, Puno y Cusco, la de Canchis decidió retirarse ante la postura asumida por la rectora de esa casa de estudios. Una parte de los delegados se trasladó a la Universidad Nacional de Ingeniería y el resto se alojó en hoteles.

Durante las tres semanas que los canchinos permanecieron en Lima, se tuvieron que contentar con los almuerzos que les brindaban residentes de la provincia en la capital. La cena, como señala Royer Galindo, eran los gases lacrimógenos que la policía les arrojaba en las manifestaciones. La participación en estas fue intensa, todas en dirección a la plaza Dos de Mayo. El dirigente menciona las que partieron de Puente Piedra en el cono norte de Lima, desde la zona de Bayóvar en San Juan de Lurigancho, y desde Huaycán en el cono centro. Además, estuvieron presentes en plantones frente a la embajada de Estados Unidos y al canal de televisión Frecuencia Latina. A consecuencia de estas movilizaciones, hubo un herido en el pie con arma de fuego y otro con perdigones en el cuerpo. El 6 de febrero, finalmente, los canchinos retornaron a Sicuani.

Sobre la conformación de la delegación a Lima, Galindo señala que se trató mayormente de comerciantes de mercados y de miembros de las rondas campesinas, en tanto que los piquetes que todo ese tiempo estuvieron bloqueando carreteras en la misma provincia se componían de comerciantes, mototaxistas y varias organizaciones netamente indígenas, como comunidades campesinas, rondas campesinas y comités de autodefensa.

Respecto a las demandas que fueron levantadas en estos dos meses de protestas, el entrevistado mostró un pronunciamiento del Fudic Canchis de fecha 2 de enero en el que se consigna una plataforma de lucha de cinco puntos: "1) Cierre del Congreso golpista; 2) Renuncia inmediata de la usurpadora, criminal, asesina Dina Boluarte y exigimos acusación penal por lesa humanidad por los 30 asesinados por su lucha en su derecho a la protesta y cárcel para los asesinos; 3) Exigimos la convocatoria a asamblea constituyente plurinacional y popular; 4) Urgente elecciones dentro de seis meses del año 2023; 5) Liberación del presidente Pedro Castillo Terrones por la detención ilegal".

Preguntado sobre la demanda de asamblea constituyente, el dirigente entrevistado subrayó que esta debe ser plurinacional, pero seguidamente reconoció que las organizaciones de la provincia todavía no han discutido el contenido más detallado de esta propuesta.

Sobre las perspectivas de las movilizaciones, Royer Galindo manifestó que las bases han demandado una mayor coordinación con las dirigencias regionales, así como con organizaciones de otras provincias de la región Cusco. En vista de ello, el día 19 de febrero hubo una reunión en Sicuani con participación de delegados de nueve provincias de las trece de



Foto: Wilson Chilo

Estudiantes universitarios y activistas mujeres impulsando ollas comunes en la Plaza Túpac Amaru.

la región. En ella, tras hacer una evaluación del movimiento social, se acordó un cambio de estrategias. Sobre las nuevas estrategias a usar, el dirigente prefirió mantener reserva y solo adelantó que se haría una pausa en las movilizaciones hasta el mes de marzo y que luego las protestas continuarían. “La lucha sigue, no se ha levantado, solo hay un cambio de estrategias” –puntualizó–.

Gloria Pilares Suyo es una activista por los derechos de la mujer con una larga trayectoria de trabajo en Sicuani, primero con organizaciones de la iglesia católica, como el Programa de Economía Solidaria, y luego en coordinadoras de organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer, como Warmikuna Puririsun, apoyada por la ONG Flora Tristán. Gloria Pilares forma parte además de la presidencia colegiada del Consejo Regional de la Mujer del Gobierno Regional Cusco (Coremuj Cusco). Asimismo, dirige Aynikusunchis, una tienda de economía solidaria.

Esta representante de las mujeres emprendedoras destaca la participación de las mujeres en las movilizaciones y señala que el protagonismo fue de las comunidades campesinas y las organizaciones de comerciantes. Ella precisa que “direccionaban los varones, pero las mujeres, autoconvocadas, han tenido una participación muy activa, mayor que en otras oportunidades”. Sobre las demandas planteadas, la entrevistada señala que de parte de las mujeres el reclamo más fuerte era la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y explica esto manifestando que la presencia de Boluarte en tan alto cargo hace retroceder el movimiento femenino.

Para Gloria Pilares, las movilizaciones no han sido de clase media sino de los sectores populares, sobre todo de indígenas originarios que sienten que no son escuchados ni valorados. Manifiesta además que si en un comienzo este sector de población pedía el retorno de Castillo era porque exigía el respeto a su voto. Añade que en el camino se ha dado un proceso, de modo que el máximo reclamo llegó a ser la renuncia de Dina Boluarte.

La activista destaca, asimismo, la participación de mujeres de Canchis, Canas y Espinar en la ciudad de Lima, las mismas que retornaron trayendo tristes testimonios sobre la represión de que fueron víctimas. Al mismo tiempo, dichas mujeres manifestaron que no están preparadas para responder sobre algunos temas, como el de la asamblea constituyente.

“¿Para qué vienes hasta Lima a protestar si no sabes lo que quieres?” –cuentan que les echaban en cara los periodistas en la capital–. Por eso, según la entrevistada, las mujeres canchinas ahora están en un proceso de discusión de la asamblea constituyente, para informarse y empoderarse.

Para esta entrevistada, un hito de la participación de las mujeres se produjo a raíz de un reportaje propalado el 5 de febrero en el programa dominical “Punto final” del canal de televisión Frecuencia Latina en el que el periodista señalaba que Sicuani era el lugar más peligroso del Cusco por la magnitud de las protestas violentas y radicales, al extremo de que “ni la policía se atreve a llegar”. Esta información a todas luces falsa y sensacionalista fue acompañada por declaraciones de un médico de la ciudad en el mismo sentido. A raíz de ello, en los días siguientes un numeroso grupo de mujeres se reunió en la plaza de la ciudad para expresar su rechazo tanto al reportaje como al médico. Por otro lado, un conjunto de maestras realizó un plantón delante de la clínica de ese médico, situación que este aprovechó para comunicarse nuevamente con Frecuencia Latina y declarar que su vida corría peligro.

Este episodio ha dado nacimiento a una iniciativa bautizada como Tribunales Abiertas, que consiste en que las mujeres, tanto en representación de organizaciones como a título personal, se reúnen en la plaza de la ciudad para expresar su opinión sobre la actual coyuntura. En la primera de tales Tribunales –cuenta Gloria Pílares– se puso 62 cartulinas en el piso que simbolizaban a los fallecidos en las protestas contra el gobierno. La intención de las mujeres de Canchis es continuar con estas Tribunales mes a mes.

Haciendo un balance de las movilizaciones, la dirigente considera que Canchis fue un punto neurálgico de las mismas, pero que se ha visto la necesidad de coordinar acciones con otras provincias, sobre todo las vecinas. Además, advierte que se ha percibido una crisis de liderazgo que ha desnudado a dirigentes que asumen cargos solo por un afán de figuración, sin estar preparados para las tareas que deben desempeñar. Asimismo, según ella, se adoleció de falta de organicidad en los gremios locales y tampoco se tuvo la capacidad de informar sobre las causas y objetivos de la lucha que se estaba desarrollando. “*Mana yachanichu*” (“No sé qué hacer”) sería la frase que según la entrevistada resume esta problemática.

En cuanto a la numerosa presencia de comuneros indígenas, Gloria Pinares lamenta que en el país se desconozca los mecanismos de organización de las comunidades, como las multas en caso de que un comunero no cumpla los acuerdos de asamblea. Tales acuerdos son vistos por ellos como una obligación social y tienen mucha fuerza. La prensa y los pobladores de las ciudades, en cambio, dice Pinares, piensan que las multas son un mecanismo de coacción para obligar a los comuneros a participar en las movilizaciones.

Denis Hualla Vega es un comunicador independiente canchino, graduado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con cuentas en Facebook e Instagram en las que informa sobre la actualidad en la provincia de Canchis. Este periodista considera que un antecedente de lo que se vive actualmente en la zona fueron las protestas que se desataron en la provincia de Canchis el año 2008 a raíz del proyecto de construcción de la hidroeléctrica Sallcca Pucara. En esa ocasión, según el entrevistado, hubo una paralización total y bastante prolongada en la provincia y además se suscitaron hechos de violencia, como la quema del local de radio Sicuani y de la Fiscalía. Fueron los sectores campesinos, que consideraban que la hidroeléctrica afectaría sus terrenos de cultivo, los que lideraron dichas protestas. A raíz de estos hechos, una delegación de varios ministros, encabezada por el entonces premier Yehude Simon, se hizo presente en Sicuani e instaló una mesa de diálogo¹.

El entrevistado es de la opinión que las recientes movilizaciones, por su duración y contundencia, son parecidas a las del año 2008, con la diferencia de que en esta ocasión fueron pacíficas. Para corroborar sus afirmaciones, él trae a colación el tendencioso reportaje de Frecuencia Latina del día 5 de febrero y añade que, a contrapelo de lo que se informó allí, el día martes 7 el alcalde de la ciudad, representantes de la Fiscalía y oficiales de la policía se apersonaron al puente Arturo, bloqueado por un piquete de manifestantes, y gestionaron el paso de dos camiones cisterna que transportaban oxígeno para el Cusco. En la cuenta de Facebook de este periodista se puede encontrar en efecto, con fecha 7 de febrero, un video en el que primero se ven algunas

1 Una rápida búsqueda en internet permitió corroborar esta información, en particular en los números 277 y 432 del boletín *Conflictos al Día* de la Defensoría del Pueblo, correspondientes al año 2008.

imágenes del reportaje de Frecuencia Latina y luego las declaraciones de un jefe policial felicitando a los manifestantes por su comportamiento.

Finalmente, Denis Hualla manifestó que, según su modo de ver, fueron las organizaciones campesinas de distritos como Tinta, Combapata y Checacupe las que impulsaron con mayor fuerza y durante más tiempo las recientes movilizaciones. A favor de las treguas, en cambio, habrían presionado las organizaciones de comerciantes de Sicuani y Marangani. Otro aspecto que Denis Hualla destaca es que en general la población se estaría imbuyendo de temas políticos y de lo que sería la nueva constitución.

3.2. Calca

Freddy Ramírez Ocoña es el secretario general del Frente de Defensa de la Provincia de Calca. Él manifiesta que, tras la destitución de Pedro Castillo y el nombramiento de Dina Boluarte como presidenta, numerosos integrantes del Frente de Defensa, sobre todo gente del campo, le increpaban: “*Imatan ruwasunchis?*” (“¿Qué vamos a hacer?”), “¿Vamos a mirar nomás?”. Esta presión habría sido la que suscitó la convocatoria a un paro provincial encabezado por la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo, las juntas de regantes, el Frente de Defensa, la asociación de motocarreros (mototaxistas), las rondas campesinas y la Federación Provincial de Campesinos. De acuerdo a la evaluación que hace este dirigente, el paro en la provincia de Calca fue contundente hasta la tregua navideña. Las medidas de fuerza incluían piquetes en las carreteras y las primeras movilizaciones a la ciudad del Cusco.

La estrategia asumida en los primeros días de enero fue priorizar los traslados a la ciudad del Cusco para marchar por sus calles y plazas, esto como una manera de visibilizar las protestas tanto a nivel regional como nacional. En estas marchas, que se repitieron en varias oportunidades, llegaron a participar en promedio unas tres mil personas y en alguna ocasión, según el entrevistado, se alcanzó un pico de cinco mil, cuando se sumaron pobladores y pobladoras de Ccorao, importante centro poblado cercano al Cusco. En general, la participación de los distritos de Písac, Lares y Lamay y de sus comunidades campesinas fue siempre nutrida al parecer y, en cambio, los distritos de Coya, San Salvador y Taray no se hicieron tan presentes.

Freddy Ramírez manifiesta que el detonante para conformar una delegación que viaje a Lima fueron las sucesivas matanzas de Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca. Además, la población recibía con muchísimo malestar las declaraciones de la presidenta Boluarte y del gobierno, en las que se tildaba a quienes se manifestaban en regiones de terroristas o de personas subvencionadas por el narcotráfico. Por el contrario, el entrevistado señala que todas las movilizaciones fueron pagadas por las propias personas que se sumaban a las protestas y que en el caso del viaje a Lima hubo una colecta pública en toda la provincia. Los principales aportantes en este caso fueron los comités de regantes, las trabajadoras del Mercado Modelo de Calca y la población en general. El dinero recolectado permitió contratar un autobús de una empresa de transporte para 54 personas para el viaje de ida y vuelta, así como proporcionar una pequeña suma para viáticos.

En cuanto a la plataforma de lucha de la provincia, incluyó cuatro puntos: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, nuevas elecciones y asamblea constituyente. Sobre este último punto, el dirigente señala que se trató de una demanda genérica. Sobre los otros, él empieza por aclarar que Pedro Castillo hizo una pésima gestión y es culpable de la coyuntura que se creó. Recalca al mismo tiempo el pésimo trabajo que realiza el Congreso y la mala gestión de los actuales ministros, lo que explica la aprobación tan baja que tienen uno y otros. En general, es de la opinión que estamos viviendo en una dictadura porque se toman represalias contra los dirigentes sociales.

Cuando se le pide evaluar la participación de los sectores campesinos, Freddy Ramírez señala que el campesino hoy día ya no es ignorante, que está al día en todo lo que pasa gracias a los celulares y las redes sociales. Sobre la coyuntura reciente, por ejemplo, manifiesta que la situación que se vivía era transmitida por internet y recibida por los celulares. Cuenta, para fortalecer su argumento, el caso de una comunera de Huarán, cerca de la ciudad de Calca, que en una entrevista radial que tuvo junto con él habló muy bien sobre las constituciones de 1979 y 1993 y sobre el problema del gas. Esta misma mujer llamó a los oyentes de la entrevista a que eduquen a sus hijos. El entrevistado por su parte añade que en la actualidad muchos campesinos tienen hijos profesionales.

Mario Herrera Hidalgo es un experimentado dirigente próximo a cumplir ochenta años que en la actual coyuntura fue elegido como delegado del

Frente de Defensa de Calca ante el Comité Coordinador de Organizaciones Sociales del Cusco. Asimismo, le tocó encabezar la delegación de la provincia que viajó a Lima para la movilización del 19 de enero. Él señala que las movilizaciones en Calca fueron espontáneas y que tuvieron como antecedente el paro agrario de la región del Cusco por la desatención del sector que se desarrolló el 23 y 24 de noviembre de 2022, todavía durante el gobierno de Castillo.

Rememorando los sucesos, Herrera manifiesta que el día 9 de diciembre se realizó una marcha por las calles de Calca y que ninguna organización puede arrogarse el mérito de haberla organizado. El día lunes 12 empezó un paro seco, con todos los mercados y comercios de la ciudad cerrados y sin circulación de vehículos. Esa misma semana, una primera delegación de calqueños se desplazó hasta la ciudad del Cusco para marchar por las calles de esa ciudad. En palabras del entrevistado, luego de esta contundente medida de fuerza las organizaciones se preguntaron qué conseguían con paralizar la provincia y llegaron a la conclusión de que era necesario intensificar las marchas al Cusco y también a Lima. Él calcula que las marchas al Cusco fluctuaron en un número de entre cinco mil y seis mil personas.

Sobre la así llamada “toma de Lima”, en la que Calca estuvo presente con sesenta personas, Herrera saca varias conclusiones. La primera, que hubo una sobrevaloración de la capacidad de influencia que podía tener la presencia de delegaciones de distintas regiones en la capital; y la segunda, que faltó una coordinación con organizaciones nacionales como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la CGTP y los gremios estudiantiles. Con la CGTP, por ejemplo, parece que hubo un desencuentro porque esta organización siguió en su propia dinámica de trabajo y con su propia línea política. Mejor suerte hubo al parecer con organizaciones sociales del cono norte de Lima pertenecientes a la Asamblea Nacional de los Pueblos. En definitiva, Herrera señala que las movilizaciones en Lima, incluidas las más sacrificadas desde los conos norte, sur y centro, no tuvieron una organización estructurada con un solo objetivo.

Entrando en detalles, este dirigente puntualiza que en Lima se armó sobre la marcha un comité coordinador que recién empezó a discutir una estrategia para las movilizaciones. El problema surgió cuando en este

comité nacional de lucha hubo posiciones enfrentadas, sobre todo entre un grupo que priorizaba las marchas al Congreso y otro que planteaba un cambio de estrategia de las propias marchas y buscar aliados en otros sectores de la sociedad, como la iglesia, los colegios profesionales, etc. A la larga, según el entrevistado, se produjo una ruptura entre estas dos posiciones, sobre todo porque la más radical exigía la reposición de Pedro Castillo.

Las lecciones que este dirigente saca de lo vivido en la reciente coyuntura son, en primer lugar, que Calca como provincia ha protagonizado un hecho histórico, pues se ha mostrado en Lima que Lima no es el Perú, que el Perú es una suma de pueblos. Herrera considera, sin embargo, que para avanzar en el proceso iniciado es necesario fortalecer las organizaciones y la coordinación entre estas. Finalmente, señala que la gente se ha dado cuenta de cómo funciona el poder en el Perú, con un poder político que está de espaldas a los intereses del pueblo, y deplora el racismo y el clasismo con que fueron tratados en Lima y en el Cusco, e incluso en la propia ciudad de Calca.

Juvenal Dueñas García es el secretario general de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Calca, el más grande de la ciudad. En su apreciación de los sucesos, él parte de señalar que el gobierno de Pedro Castillo no fue aceptado por un sector de la sociedad peruana, seguramente porque incomodaba a grandes capitales. El malestar que causó su destitución fue el que impulsó las movilizaciones. La población sintió que es utilizada en épocas electorales solo para decir que en el Perú hay democracia. Sin embargo, son pocos los que tienen el poder y lo que quisieron los pobladores y pobladoras de Calca fue revertir eso, buscar un verdadero cambio para que haya justicia.

Dueñas pone el acento seguidamente en los problemas que enfrentan las organizaciones sociales. “Hay mucha división en las organizaciones y mientras no haya unidad no se va a poder avanzar” –acota-. Añade que se ha constatado una caída de los sindicatos y que al parecer no hay esperanzas en el corto plazo de que surja una instancia de coordinación. La culpa sería de los dirigentes, que no tienen capacidad de convocatoria, pero que sí quieren figurar ante la prensa. Este diagnóstico lo hace extensivo a los partidos de izquierda, que, según él, carecen de propuesta y de capacidad de convocatoria. “Todos en eso son iguales” –precisa-.

Este dirigente se queja asimismo del papel jugado por las Fuerzas Armadas, que estarían detrás de las organizaciones de los polos blancos y de las marchas pacíficas que se realizaron en muchas ciudades, incluida Calca, para enfrentar a la población. Por lo mismo, señala que se necesita hacer muchos cambios para refundar el país. Con todo, concluye que las movilizaciones no fueron un fracaso, sino que más bien mostraron que hay que estar más fortalecidos y mejor organizados. Y destaca la participación de la juventud en las mismas, aclarando que en el caso de Calca aproximadamente la mitad de la delegación que viajó a Lima estuvo conformada por jóvenes.

Faustino Pacco Pacco es un joven comunicador social de la comunidad de Paru Paru del distrito de Písac. Por formación es técnico en administración de empresas, pero por vocación es un comunicador que aprendió el oficio en el programa radial "Voz campesina", uno de los primeros que usó el quechua en la ciudad del Cusco. En su opinión, en su distrito el protagonismo de las movilizaciones lo tuvieron las doce comunidades campesinas de Písac, las que en sus asambleas comunales acordaron



Foto: Eleana Llosa

no solo los paros sino también las movilizaciones a la ciudad del Cusco, ocho en total. El detonante de las protestas habría sido, según este comunicador, la masacre de Andahuaylas y después la de Ayacucho. “Esto empuja a las comunidades a organizarse y ver lo que pasa en el país” –señala este entrevistado–.

Una de las primeras medidas que adoptaron las comunidades fue el bloqueo del puente de Písac, en la llegada al Valle Sagrado desde el Cusco. De esta manera buscaron involucrar a toda la provincia de Calca en las protestas. Las demandas de los comuneros de Písac eran básicamente tres: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso y nuevas elecciones. En el camino, según Faustino Pacco, se incorporó el pedido de asamblea constituyente.

En cuanto a las organizaciones del pueblo de Písac que se sumaron a las protestas, el comunicador menciona a las vendedoras y vendedores del mercado de abastos, a los artesanos, transportistas y mototaxistas, así como a asociaciones pro vivienda (APV). Sobre los transportistas, precisa que trabajan uniendo al poblado con las doce comunidades del distrito y con las ciudades de Calca y Cusco, y que incluso dentro de cada comunidad hay algunos transportistas. Esto explica por qué las delegaciones que venían de Písac al Cusco se movilizaban en unidades de transporte interprovincial tipo Starex, Sprinter o combi.

Faustino Pacco aclara que durante las ocho movilizaciones que pobladores de Písac realizaron al Cusco, estos se mantuvieron de forma autónoma, sin coordinar con otras organizaciones. A la larga, esto fue evaluado como una debilidad de sus protestas y se decidió que en adelante se va a coordinar con organizaciones de las trece provincias de la región.

Seguramente debido al tipo de información que difunde en sus redes sociales y en la página de Facebook de “Voz campesina”, Faustino Pacco hace hincapié en los cambios que se han dado en la vida de los campesinos. “Los padres han pensado mucho en la educación de sus hijos y ahora las comunidades tienen abogados, ingenieros, contadores, etc.” –acota–. Explica también que, al igual que en su caso, muchos comuneros trabajan de lunes a viernes por un salario o un sueldo y el sábado y domingo regresan a la comunidad para trabajar en la chacra para su alimentación. Se enorgullece, asimismo, de que todas las muchachas y muchachos tengan secundaria completa.

Al mismo tiempo, este comunicador manifiesta que todas las costumbres comunales se mantienen vivas, en particular el *mojun muyuy*, una actividad que consiste en recorrer los linderos comunales particularmente para que los jóvenes conozcan el territorio comunal. En su comunidad, Paru Paru, el *mojun muyuy* se realiza en vísperas del día de comadres, es decir, el jueves anterior a los carnavales. Faustino destaca, asimismo, la vigencia de los rituales espirituales, en particular los que se realizan en las apachetas, donde se colocan cruces y se rezan oraciones llamadas alabado o alabada.

En tanto cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande de Písac estaban enfrentando al momento de la entrevista un proceso de detención preventiva por su participación en las movilizaciones², Faustino manifestó que, al contrario de lo que piensan las autoridades, la criminalización de las movilizaciones va a mantener viva la lucha de las comunidades. Él considera que en el caso de Písac, las doce del distrito van a seguir protestando hasta conseguir la libertad de los cuatro jóvenes detenidos y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

3.3. La Convención

Marco Olazábal Echegaray es secretario de organización del Sute La Convención. Sus estudios para profesor los realizó en el Instituto Pedagógico Quillabamba. Él considera que la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado fue planificada por los partidos de derecha y manejada por los poderes fácticos del Perú. Según nos cuenta, en la ciudad de Quillabamba la reacción de las organizaciones sociales fue inmediata y las paralizaciones empezaron el 8 de diciembre. Los gremios que las coordinaron fueron la Federación de Trabajadores de la Convención y la Federación Provincial de Campesinos de La Convención (Fepcacyl), que a su vez conforman el Comité de Lucha de la Provincia de La Convención.

Este dirigente señala que a partir del 4 de enero la provincia se declaró en paro seco y organizó el traslado de manifestantes a la ciudad del Cusco. A pesar de la distancia de más de seis horas por carretera, al Cusco llegó una delegación de unas seiscientas personas que permanecieron durante

2 En setiembre de 2023, estos jóvenes siguen detenidos.

una semana en la ciudad, un grupo alojado en el estadio Garcilaso, otro en el local de la FDTC y el resto en alojamientos particulares. Desde el Cusco, a su vez, partió una delegación a Lima de unas cincuenta personas, entre ellas nuestro entrevistado.

Sobre lo sucedido en Lima, Marco Olazábal manifiesta que las delegaciones estuvieron organizadas por regiones, pero que no hubo buena coordinación entre las provincias de cada región y además que se desconocía a los dirigentes que querían representar a todos. Según él señala, antes lo mismo había ocurrido en la ciudad del Cusco. Añade que, a pesar de que en Lima se conformó un colegiado con representantes de la mayoría de las provincias de la región Cusco y de los jóvenes universitarios, las marchas no estaban coordinadas y cada grupo iba por su lado. Sobre la participación de otras regiones, comenta que los más dolidos eran los de Apurímac y Puno. Resalta finalmente la poca participación de organizaciones sociales de la propia Lima.

En cuanto a la plataforma de lucha de la provincia de La Convención, el entrevistado precisó que esta tenía solo cuatro puntos: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, nuevas elecciones y asamblea constituyente. Consideró necesario aclarar, asimismo, que algunos sectores



Foto: Wilson Chilo

Delegación de la provincia de La Convención en la Plaza Túpac Amaru del Cusco.

pedían la liberación y restitución de Pedro Castillo, pero que este punto no fue considerado en la plataforma de lucha de La Convención.

Entre los sectores que tuvieron mayor protagonismo en las movilizaciones, de acuerdo a este dirigente de los maestros, destacan los campesinos junto a las trabajadoras de mercados y los de construcción civil. Para él, la participación campesina fue muy notoria, asimismo, en otras provincias del Cusco. En el caso de Quillabamba, menciona al sindicato del Mercado Modelo y del Micaela Bastidas, así como a los mototaxistas.

Sobre las perspectivas de las movilizaciones, el entrevistado explica que se está en el proceso de bajar a bases para realizar coordinaciones con las federaciones distritales de campesinos y que el lunes 6 de marzo³ se realizará una reunión del Comité de Lucha de la Provincia de La Convención en la que se tomarán nuevas decisiones. Precisa que en la provincia hubo conciencia de que se trató de un paro político con participación masiva y que desde un primer momento no se quiso mezclar otro tipo de demandas. Puntualiza finalmente que de parte de las más altas autoridades hubo un comportamiento abusivo, racista y clasista. Asimismo, que las organizaciones pretendían siempre realizar marchas pacíficas y la violencia se presentaba como respuesta a la brutalidad policial.

3.4. Cusco

Walter Torres es el presidente de la Fartac. Él señala que a raíz de los sucesos del 7 de diciembre, su gremio, a petición de organizaciones campesinas de las trece provincias de la región, coordinó una reunión con organizaciones sociales de la ciudad del Cusco para conformar una comisión coordinadora de la región Cusco, sin presidencia. Anotó que las organizaciones de las provincias, en todo caso, se autoconvocaron para movilizarse tanto en sus propias localidades como trasladándose al Cusco.

En el Cusco, señala este dirigente, se realizaron coordinaciones con la Fiscalía de Prevención del Delito a cargo del fiscal provincial Eduardo Poblete Barberis, pero este no cumplió con la promesa dada y la policía reprimió las manifestaciones con el saldo de un fallecido y siete heridos.

3 La entrevista tuvo lugar el 3 de marzo.

Es más, el 12 de enero, es decir, al siguiente día de dichos enfrentamientos, el fiscal Poblete presentó una denuncia contra el gobernador regional Werner Salcedo por otorgar el estadio Garcilaso para que duerman algunas de las delegaciones que llegaban de provincias.

Sobre el viaje de delegaciones a Lima, Torres señala que este se realizó bajo la modalidad de autoconvocatoria para evitar la criminalización de las dirigencias. Él calcula que unos 2300 cusqueños y cusqueñas de distintas provincias se trasladaron a Lima, algunos desde el 14 de enero. En Lima, señala, se formó un comité de lucha entre representantes de las diversas regiones y la CGTP, CCP, CNA y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc). Lo más saltante de las movilizaciones en la capital fue la desmedida represión de parte de las fuerzas del orden y la criminalización, así como el maltrato y discriminación de que eran objeto los manifestantes de provincias.

Por esta razón, Walter Torres señala que la Fartac ha planteado quejas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el uso excesivo de la fuerza por la policía, cuyos efectivos se comportaron prácticamente como si estuvieran en una guerra. Asimismo, se ha aclarado ante estos organismos internacionales que las movilizaciones no han recibido ningún tipo de financiamiento de la minería ilegal, el contrabando o el narcotráfico y que las organizaciones sociales rechazan el uso de la figura de apología del terrorismo para criminalizar a sus dirigencias.

Sobre el tema de la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial, señala que esta es desproporcionada, pues no se investiga las muertes de manifestantes a manos de la policía y el ejército y en cambio se actúa con una celeridad inusual para condenar a prisión a los manifestantes. Da como ejemplo de esto último el caso de los cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande de Písac, que al momento de la entrevista ya habían sido condenados a nueve meses de prisión preventiva. Este dirigente señala además que ni la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público (Ocajimp) ni tampoco la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (Onajup) del Poder Judicial, encargadas de implementar políticas de integración intercultural que favorezcan a las comunidades indígenas, realizaron actuación alguna ante los abusos policiales.

A la pregunta de si las movilizaciones levantaban algunas reivindicaciones étnicas, Walter Torres deriva su respuesta al tema del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y puntualiza que en la actual coyuntura se está pisoteando los derechos de los pueblos originarios. Añade, sin embargo, que en las movilizaciones las comunidades rurales han demandado un país nuevo y han conseguido plantear una agenda nacional. Esto se resumiría en el lema “Nueva constitución, nuevo Perú”.

Sobre las perspectivas de las movilizaciones, el dirigente de la Fartac señala que, en tanto las poblaciones urbanas viven el día a día, se ha planteado que haya un consenso entre organizaciones campesinas y urbanas, como las de vendedoras de mercados y transportistas. Subraya, sin embargo, que son las comunidades campesinas las que garantizan la seguridad alimentaria de la población y que no pueden renunciar a su derecho a manifestarse. Por lo mismo, se va a seguir rechazando las declaratorias de emergencia y se continuará en la lucha, aunque con nuevas estrategias sobre las que prefiere guardar reserva.

Leonela Labra Panocca es la presidenta de la FUC y estudiante de los últimos ciclos de la especialidad de Historia. Ella encabezó la delegación de la juventud universitaria que viajó a Lima para el 19 de enero y a raíz de eso fue entrevistada por diversos medios, entre ellos por el reconocido periodista Marco Avilés para el portal de Facebook “Salud con Lupa”. De esta extensa entrevista, queremos traer a colación lo que la joven universitaria señala sobre la motivación de las protestas y la demanda de asamblea constituyente:

Lo que buscan en este momento los ciudadanos de las provincias más alejadas es justicia. No hablamos solo de los más de sesenta muertos a manos del actual Gobierno. Hablamos de muchas más personas muertas en años de represión, donde la actitud de las autoridades ha sido: “voy, reprimo, tiro bombas, asesino y nadie me va a juzgar porque ese es un pueblo donde no existe Estado, ni prensa”. Este hartazgo viene de antes. Y muchas familias no han podido encontrar justicia [...]. La población está muy cansada, muy molesta. ¿A quién no le duele perder a un familiar? Por eso yo decía que la gente no está luchando solo desde ahora. Si en muchas regiones se habla sobre una nueva Constitución o una Asamblea Constituyente es justamente porque el Estado ha creado un

escenario dramático. La clase política pudo haber entendido esto y hubiera sido lo más saludable. Soy consciente de que en nuestro país existen posturas diferentes, pero estas posturas diferentes no se pueden amparar en racismo, clasismo y discriminación en pleno siglo XXI. Creo que las personas se movilizan por eso. Porque la justicia existe para unas personas y no para otras.

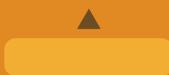
De otra entrevista, la concedida al periodista Justo Chilo Luna, del medio alternativo de reciente aparición *Sur, Semanario de Política y Cultura*, nos parece pertinente rescatar las apreciaciones de Leonela Labra sobre el ejercicio del liderazgo en las organizaciones sociales que se hicieron presentes en la actual coyuntura:

Yo creo que sí existen liderazgos, pero no unificadores, ni liderazgos que ayuden a consensuar. Eso es un poco triste, debo reconocerlo. Por ejemplo, en nuestra región del Cusco hemos tratado de formar una mesa que pueda unificar las fuerzas de los trabajadores, estudiantes y de diferentes sectores, pero en tal caso lo que existe es un liderazgo que queda en una coordinación, no va más allá. Tampoco se ha podido consolidar el liderazgo por regiones, por macro regiones y a nivel nacional; eso no ha sucedido. Por ejemplo, había regiones que tenían pronunciamientos con seis puntos de agenda y otras regiones con cuatro puntos. Por otro lado, hay liderazgos antiguos y que nuevamente han vuelto a la lucha y en el camino se están formando otros, pero no se ha consolidado uno nacional quizá porque las masas, al momento de pedir una movilización, han sobrepasado a sus dirigentes. Yo lo he vivido porque mientras nosotros estábamos preocupados en lo que pasaba en la Universidad, inmiscuidos en una agenda interna, sentimos que teníamos la labor y el compromiso de llamar a movilizarnos ante tanta injusticia. Esto que pasa es algo muy particular. A pesar de que algunos dirigentes han tratado [de] tener posiciones más neutras en este contexto, el pueblo finalmente ha conformado sus comités de lucha, sus comités regionales, sus comités provinciales, han determinado muchísimas actividades que han sobrepasado a los dirigentes.



4

Autoridades, gremios empresariales y empresarios del Cusco



Tras las elecciones de 2022, las nuevas autoridades regionales entraron en funciones los primeros días de enero. Ya el 9 de enero, a raíz del gran número de fallecidos en torno al aeropuerto de Juliaca, el nuevo gobernador regional del Cusco Werner Salcedo emitió un comunicado declarando un día de duelo regional. Además, en dicho comunicado se pide la renuncia de Dina Boluarte “para garantizar con este hecho la convocatoria a elecciones inmediatas”. Se añade que “el Congreso de la República debe nombrar una nueva directiva con carácter amplio y consensuado a fin de que asuma el Gobierno de Transición y gestione el país hasta las elecciones presidenciales y generales el año 2023”.

El gobernador regional se reafirmó en su posición sobre el gobierno y el adelanto de elecciones en reiteradas oportunidades en declaraciones dadas a diferentes medios de comunicación, en particular en una entrevista en el programa “Al estilo Juliana” de ATV Noticias, esto con fecha 12 de enero. Igualmente, en declaraciones dadas al diario *Gestión* el 25 de enero, Salcedo hace hincapié en que los gobernadores regionales han consultado al Jurado Nacional de Elecciones sobre la posibilidad de realizar elecciones el año 2023 y que han recibido una respuesta afirmativa del organismo electoral.

Por su parte, el alcalde provincial del Cusco Luis Beltrán Pantoja guardó distancia con la demanda de renuncia de Dina Boluarte, declarando a la prensa, como se recoge en el portal “Cusco en portada” de Instagram con fecha 2 de enero, “que no está a favor ni en contra de la renuncia de la señora Dina Boluarte a la Presidencia de la República. Yo le estoy pidiendo adelanto de elecciones. Esa es mi postura”.

Un hecho en el que sí coincidieron ambas autoridades de la región fue en su rechazo a las declaraciones del congresista Juan Carlos Lizarzaburu sobre la *wiphala* que enarbolan manifestantes del Cusco y Puno, bandera a cuadros con los mismos colores que la del Cusco a la que tildó de “mantel de chifa”. El día 3 de febrero, el alcalde del Cusco emitió un comunicado en el que en su primer punto se manifiesta: “Condenamos y rechazamos en todos los términos la afrenta y menosprecio a nuestro símbolo cultural contemporáneo del Cusco, la Bandera del Tahuantinsuyo”. Por su parte, el gobernador regional Werner Salcedo, también el 3 de febrero, emitió un pronunciamiento en el que en su primer punto se lee:

Rechazo de manera categórica el agravio y la afrenta por las expresiones de menosprecio y de forma despectiva a la bandera del Tahuantinsuyo. Misma que también representa a la bandera del Cusco, la cual ha sido minimizada por el legislador, poniendo en cuestionamiento NO solo el símbolo provincial y regional sino también la IDENTIDAD DE LOS CUSQUEÑOS.

En esa ocasión, ambas autoridades solicitaron además que la Comisión de Ética del Congreso sancione al congresista Lizarzaburu.

Veamos a continuación la posición de la Cámara de Comercio del Cusco, el gremio más representativo de los empresarios de la región. Este organismo reaccionó con celeridad al intento de autogolpe de Pedro Castillo del día 7 de diciembre y emitió en su página web un pronunciamiento en el que “rechaza tajantemente el autogolpe a la democracia, a la disolución del congreso y el anuncio del denominado ‘gobierno de excepción’, el cual vulnera y atropella los derechos constitucionales de la población peruana”. Puesto que al parecer el Congreso todavía no había procedido a destituir a Castillo y nombrar a Dina Boluarte como presidenta de la República, este comunicado termina con las siguientes palabras: “Conminamos a la ciudadanía y organizaciones gremiales a pronunciarse y actuar para salvaguardar el estado de derecho del Perú. Pedimos la unidad de la sociedad civil para defender a nuestro país”.

Muy pronto, el día 13 de diciembre, siempre en su página web, la Cámara, al tiempo que condena los actos de violencia que está sufriendo el país, sale en defensa del gobierno de Dina Boluarte señalando que es fruto de “una salida constitucional que todos debemos respetar al margen de nuestras preferencias políticas”. Al mismo tiempo, el gremio

empresarial se opone a las demandas de cierre del Congreso y de asamblea constituyente, pues “constituyen parte de la agenda política de los sectores radicales de izquierda, pero no son ni una necesidad ciudadana, ni la solución a los problemas económicos de nuestro país”. En este mismo pronunciamiento, la Cámara incidirá sobre un asunto que marcará su actuación en la actual coyuntura: su rechazo a los ataques a aeropuertos e infraestructura productiva en tanto constituyen “un acto de guerra contra nuestro país que debe ser CONDENADO y reprimido por el Gobierno, la policía y todas las instituciones”.

El 6 de enero, al parecer en reacción a la situación en la región Puno y al mismo tiempo ante la huelga indefinida que se anunciaba en el Cusco, el gremio de los empresarios cusqueños expresa su rechazo rotundo a “los intereses cesionistas [sic] de quienes se presentan como líderes de las movilizaciones del Macro Sur, con el fin de desintegrar la unidad territorial de nuestra nación”. En referencia a las paralizaciones en la región del Cusco, este comunicado manifiesta lo siguiente:

El TURISMO ha sido golpeado duramente por la pandemia y ahora que estamos en un proceso de reactivación, NO permitamos que intereses políticos de malos dirigentes destruyan nuestra fuente de trabajo y el sustento del 60% de cusqueños.

Dos días después, el 8 de enero, la Cámara de Comercio del Cusco vuelve sobre el tema del impacto negativo que está sufriendo el turismo debido a las protestas al señalar que esta actividad “atraviesa una situación severamente crítica acentuada por movilizaciones y bloqueos de vías, afectando directamente a los circuitos y corredores turísticos”. Haciendo por primera vez una mención directa de los sectores sociales que protagonizan las movilizaciones, este gremio señala lo siguiente:

Las últimas manifestaciones sociales no buscan solucionar las verdaderas necesidades de la población, por el contrario, son azuzadores políticos que engañan a los campesinos de las diferentes provincias inculcándoles odio entre peruanos, haciendo que bloqueen las vías de comunicación.

El 11 de enero, al parecer a raíz de los actos de violencia que se desataron tras el fallecimiento del comunero de Anta Remo Candia, el gremio empresarial manifiesta lo siguiente:

Recogemos las declaraciones del Fiscal de Prevención del Delito Dr. Poblete y expresamos nuestra preocupación sobre la utilización del estadio Garcilaso para albergar, alimentar y alcoholizar a personas que llegaron de provincias con la finalidad de realizar una marcha pacífica, terminando el día en violencia y actos de vandalismo.

A continuación, la Cámara hace un llamado para que

[...] la Fiscalía de prevención del delito, PNP, Ejército peruano hagan cumplir el estado de derecho y respeto a la libre transitabilidad, el derecho a trabajar y se tomen las acciones correspondientes para sancionar a quienes atenten y cometan estos delitos.

El 25 de enero, ante la situación de desabastecimiento de alimentos y combustibles que se vive en la ciudad del Cusco, la Cámara exige nuevamente la apertura de las vías de acceso al Cusco y añade: "Es trascendental que el gobierno restituya la paz, seguridad y libre tránsito para que las empresas y trabajadores puedan retornar a sus actividades". Cinco días después, el 30 de enero, ante la persistencia del desabastecimiento y el encarecimiento de los productos de primera necesidad, el gremio empresarial se dirige a las autoridades regionales y municipales "para que encuentren los medios necesarios para solucionar este problema, considerando que la seguridad y el desarrollo económico de la región es función inherente a sus cargos".

El 3 de febrero, finalmente, el gremio de empresarios cusqueños señala que durante las marchas "muchos cusqueños han sido agredidos simplemente por expresar su desacuerdo con estas movilizaciones al sentir que su derecho al trabajo es vulnerado por los paros y bloqueos de vías". En consecuencia, solicita nuevamente que "la Policía y la Fiscalía de Cusco actúen de acuerdo a ley y ejerciendo sus facultades, identificando a estas personas con actuar delincencial para sancionarlos con todo el peso de la ley". Seguidamente se plantea que se haga uso para ello de los videos difundidos en redes sociales "donde se puede identificar a los facinerosos".

Otro importante gremio empresarial de la región es la Cartuc, cuyo propósito, como reza en su página web, es "representar los intereses de los asociados propiciando el desarrollo integral de la actividad turística". Este gremio se pronunció una sola vez en la coyuntura, con fecha 13

de diciembre, expresando su preocupación por el impacto negativo que sufrirá la actividad turística a raíz de las movilizaciones y medidas de protesta. En ese sentido, hizo el siguiente llamado en su página web:

La Cámara Regional de Turismo de Cusco, invoca a los colectivos y sectores de la región de Cusco que han protagonizado actos de hostilidad, bloqueo de carreteras y atentados contra la propiedad pública y privada, a cesar estos actos y ejercer su derecho de opinión y libertad de conciencia en forma pacífica, sin impedir el libre tránsito de las personas y de nuestros visitantes.

Haciendo un análisis más matizado de la crisis política, la Cartuc marca primero distancia con la clase política del país y en particular con el Congreso, señalando “los graves desatinos que se advierten en su labor”, para seguidamente expresar su indignación con la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo y “deplorar el golpe de estado que perpetró el 7 de diciembre”. El gremio de los empresarios de turismo termina su comunicado expresando su acuerdo “con una reestructuración de la política, pero a través de los mecanismos democráticos, conforme a la Constitución y a través del Congreso, donde están representados todos los peruanos y corrientes de opinión”.

Conozcamos a continuación las opiniones de dos empresarios de turismo del Cusco, Rogers Valencia Espinoza y Silvia Uscamayta Otárola. Rogers Valencia es un empresario de turismo y gestor público que ocupó los cargos de ministro de Comercio Exterior y Turismo y de ministro de Cultura durante el gobierno de Martín Vizcarra. Para él, la situación de conflictividad social que se presenta a partir del 7 de diciembre tiene su origen en el año y medio de desgobierno desde que Pedro Castillo asumió la presidencia. Para el caso concreto de la región del Cusco, esto se habría traducido en un descontrol en Machupicchu, que durante el año 2022 estuvo diez veces cerrado al turismo, y en los conflictos permanentes que se vivieron en el corredor minero. A su vez, la minería ilegal, en un intento de controlar los insumos que permiten su funcionamiento, estaría detrás de las protestas, esto porque el control de combustibles hizo que en los últimos años los mineros ilegales invirtiesen en estaciones de servicio.

Esto, que Valencia llama “una tormenta perfecta”, habría sido agravado por la ineffectividad del Estado que quedó patente en casos como las

largas demoras para la obtención de pasaportes y licencias de conducir, así como en general en la precariedad de los servicios públicos. Todo ello habría generado una grave crisis de gobernabilidad, pues para este empresario de turismo la gobernabilidad consiste precisamente en disminuir la incertidumbre.

Así pues, según el diagnóstico de Rogers Valencia, el detonante de la crisis actual habría sido que se juntaron dos olas, la que venía de atrás por la mala gestión de Castillo y el golpe fallido para el que la izquierda se había venido preparando un año y medio. El movimiento social, además, habría sido utilizado por intereses factuales muy concretos: la minería ilegal en Puerto Maldonado y Chala, el narcotráfico en Ayacucho y Andahuaylas, el contrabando en Ilave. En apoyo de su argumento, añade que 38 comisarías fueron atacadas, igualmente 91 oficinas públicas, mayormente de la Fiscalía y el Poder Judicial, así como 100 instalaciones privadas, caso de la piscigranja Piscis en Puno, donde se habrían perdido 200 toneladas de trucha por falta de alimentos.

En referencia a los actores sociales de las movilizaciones, Valencia considera que se ha presentado un fenómeno de victimización, pues quien se siente así solo tiene dos opciones: o sufrir o atacar propiedad privada.

Foto: Andina/Difusión



Turistas varados en el pueblo Machu Picchu.

Desarrollando este argumento, el empresario precisa que la victimización es una enfermedad social y la manera de frenarla es con un Estado gestor y que actúa con transparencia.

En cuanto al impacto de las protestas en la actividad turística, Rogers Valencia señala que fue considerable en tanto el turismo es una actividad terciaria vacacional que, en cuanto se presentan problemas en un destino, busca de inmediato alternativas en otros. Eso habría pasado en el mes de diciembre, cuando los flujos de turistas que se encontraban en el país se reorientaron rápidamente hacia la Amazonía por los problemas en Cusco y Puno. Las reservas a meses futuros, no obstante, han sido canceladas hasta el mes de junio, razón por la cual no se esperaría una recuperación de la actividad sino hasta julio, agosto y setiembre.

En esta línea, el empresario considera que sería un éxito si este año 2023 se llega al 50% de ingresos del año prepandemia de 2019. Para ello haría falta declarar la intangibilidad del ferrocarril del Cusco a Machupicchu con la adhesión de todas las fuerzas vivas de la región. Solo de esta manera se evitaría que el turismo se convierta en blanco de todos los reclamos: de profesores, de agricultores, etc. Y a largo plazo, según Valencia, lo que se requiere es un cambio de modelo de gestión de Machupicchu, de uno de recorrido itinerante a otro que esté apoyado en un centro de interpretación que disminuiría el tiempo de permanencia de los visitantes en el sitio arqueológico. Al mismo tiempo, sobre todo considerando la próxima entrada en funcionamiento del aeropuerto de Chinchero, haría falta solucionar el problema del acceso a la *llaqta* eliminando los actuales monopolios de Consettur en los autobuses y de PeruRail en el servicio de tren.

Analizando lo que puede ocurrir con las movilizaciones en el corto plazo, Rogers Valencia parte de señalar que la población rural ha mejorado sus condiciones de vida, pero que todavía hay un grueso de ella que se siente excluida. Es en este sector en el que habría calado el discurso de que el parlamento en conjunto es el culpable de lo que está ocurriendo. De allí, por un lado, la idea errada de que fue el Congreso el que dio un golpe de Estado para destituir a Castillo y, por otro, el hecho de que la presidenta Dina Boluarte sea considerada traidora. Sin embargo, este empresario considera que la población debe entender que no es posible volver atrás. Es más, considera que en tanto el Perú es un 71% urbano, la población rural se ha encontrado con una mirada opuesta a

sus intereses, por lo que resultaría muy difícil que haya una segunda ola de movilizaciones.

Por último, este líder empresarial evalúa que las movilizaciones no han podido ni podrán forzar la renuncia de un Congreso cuyos integrantes, sean de derecha o de izquierda, no quieren irse. Y en tanto al momento de la entrevista el 97% del Perú ya estaba funcionando, según sus apreciaciones, es de la opinión que más movilizaciones no lograrán nada.

Silvia Uscamayta fue hasta en cuatro oportunidades presidenta de su gremio, la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco (AATC), el segundo en importancia en la región junto a la Cartuc. Asimismo, ella fue regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco en el periodo 2011-2014, durante la gestión de Luis Flores García. Para esta empresaria, tras la destitución de Pedro Castillo en el Cusco se crea un escenario muy doloroso por el desencuentro entre ciudadanos y ciudadanas. La falta de tolerancia, que hace que cada quien quiera hacer prevalecer sus opiniones, ha llevado a un deterioro de las relaciones entre las personas y a un grado extremo de polarización. Esta, según su valoración, es agravada por el papel que está jugando la prensa a nivel nacional y local y por la posición de la presidenta Dina Boluarte, que abre heridas, cuando lo que se necesitaría es tender puentes y propiciar espacios de diálogo como el Acuerdo Nacional y las mesas de concertación.

Sobre los sectores que protagonizan las movilizaciones sociales, la empresaria señaló que evidencian los doscientos años de colonización, de injusticia, de explotación. Según ella, su descontento se debería a que estos sectores votaron por un cambio, una reforma política y social para los que menos tienen, pero no fueron tomados en cuenta. Deplora, además, que desde el Estado no haya una política integral de desarrollo que apunte a cerrar las enormes brechas en educación, desnutrición, avance tecnológico, salud, etc. Recuerda que, por si fuera poco, la pandemia agudizó estas brechas.

Silvia Uscamayta considera, asimismo, que las movilizaciones, en un comienzo legítimas, poco a poco fueron infiltradas por gente violenta. Esto provocó la reacción de personas que querían trabajar y organizaron las marchas por la paz. Con todo, es de la opinión de que a pesar de que las movilizaciones perdieron legitimidad con el paso de las semanas, son un llamado a la opinión pública nacional en el sentido de que hay un

país descontento, de que el Perú profundo reclama un país con iguales oportunidades para todos. “En siglos no se ha cambiado la realidad de exclusión” –puntualiza la entrevistada–.

Por otro lado, la empresaria llama la atención sobre la crisis de los partidos políticos, considerando que son oportunistas y electoreros y que además carecen de valores que orienten su actuación. Por el contrario, los partidos solo obedecen a intereses subalternos que alimentan el descontento de la población. Añade que, al mismo tiempo, en este momento tan difícil que le toca vivir al Perú, presenciamos una falta de liderazgos que hace que las marchas se desgasten.

Resumiendo, la empresaria considera que estamos en un momento de quiebre, un antes y un después, y que las cosas en el país no pueden volver a ser como antes. Por lo mismo, hay que pensar en buscar el bien común, en buscar políticos auténticos con vocación de servicio, y en un Perú nuevo. Para ello llama a retomar los espacios de participación a todo nivel, como los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y los de Coordinación Local (CCL). Piensa, asimismo, que es necesario construir una visión integral de desarrollo y perseguir el buen vivir del que hablaban los incas. En esta tarea, cada ciudadano debería preguntarse sobre cuál es su aporte a su comunidad y al mismo tiempo dejar de lado la indiferencia y el individualismo. Esto permitiría que los ciudadanos y ciudadanas nos proyectemos a diversos espacios y generemos pequeños proyectos pilotos de cambio donde la solidaridad sea un principio básico.

Sobre el impacto que han tenido las protestas en la actividad turística, Silvia Uscamayta señala que la crisis social y económica ha generado un drama económico con cero ingresos para las pequeñas y medianas empresas de turismo. Señala como antecedente lo sucedido durante la pandemia, cuando muchas empresas quebraron y otras recibieron apoyo del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE Turismo) y de Reactiva Perú. Dichas empresas estaban pagando tales préstamos y ahora no tienen cómo solventar sus deudas con los bancos, pues la mayoría de pequeñas y medianas empresas ha suspendido actividades. Esto se agrava porque, según su parecer, el turismo genera una cadena de valor que involucra a otros sectores, como la producción artesanal y agrícola destinada a hoteles y restaurantes. Por todo ello, hace un llamado a que el Estado brinde apoyo a las pymes para refinanciar sus deudas.

Sobre las perspectivas del sector, la empresaria piensa que revertir la situación que se ha creado demandará mucho tiempo en el caso del turismo extranjero, pues en la actualidad los países no recomiendan al Cusco como destino. Según sus cálculos, el turismo extranjero va a estar ausente entre seis meses y un año. Sería el momento de reorientar la actividad fomentando el turismo sostenible, entendido como aquel que no solo piensa en el beneficio económico, sino que además tiene un enfoque integral abarcando el aspecto ambiental y el cultural. El turismo se convertiría así en una fuente para revalorar la cultura, sobre todo la de los pueblos indígenas, y para cuidar el territorio. Para ello sería necesario fortalecer la Organización de Gestión de Destino (OGD) Cusco, que fue descuidada durante la última gestión del Gobierno Regional y que es la instancia que permite coordinar los esfuerzos de los sectores público y privado. De este modo, se podría seguir impulsando, por ejemplo, el turismo vivencial y el voluntariado en comunidades, así como en general proyectos sociales y ambientales en los que ya se tiene experiencia.



5

Vulneraciones de los derechos humanos



Las movilizaciones en el Cusco, durante las primeras semanas, transcurrieron de forma mayormente pacífica, aunque la prensa cusqueña consigna algunos hechos que considera vandálicos. Así, con fecha 15 de diciembre, el DC en su titular de portada señala que los manifestantes hicieron un intento de ingresar al aeropuerto de la ciudad y en la provincia de Espinar dos peajes fueron incendiados. El 19 de diciembre, sin embargo, este mismo periódico señala en su titular de portada que las “movilizaciones continuarán y se reitera que serán pacíficas”. En el mismo sentido es el titular del 5 de enero, que destaca: “Paro se desarrolló sin hechos de violencia”.

La tensión crece considerablemente luego del 9 de enero, cuando se produce la masacre del aeropuerto de Juliaca. Así, el día 11 de enero, en un intento de los manifestantes de dirigirse al aeropuerto de la ciudad, se producen violentos enfrentamientos con el saldo de un fallecido y 42 heridos, casi la mitad de ellos con heridas de perdigones en diferentes partes del cuerpo.

Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad Urinsaya Collana de la provincia de Anta, es el nombre de la persona fallecida. La prensa tanto a nivel local como nacional informó que la víctima ingresó a las 2:59 pm al hospital Antonio Lorena con el diagnóstico de herida de proyectil de bala en el tórax y abdomen y que falleció a las pocas horas.

En cuanto a las decenas de heridos, el DC de fecha 12 de enero publica la relación completa proporcionada por las autoridades de salud. El caso más grave de todos es el del joven Rosalino Flores Valverde, quien recibió 36 perdigones en el tórax y fue internado en estado crítico en el Hospital

Antonio Lorena de la ciudad. En declaraciones a Infobae con fecha 15 de enero, Homero Dueñas, director adjunto del mencionado hospital, declara que hay cuatro pacientes hospitalizados tras las protestas, dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, José Flores, padre de uno de los heridos y miembro de la comunidad de Conchacalla en el distrito cusqueño de San Jerónimo, declara que Rosalino “está en coma” y suplica que atiendan bien a su hijo, que recibió disparos de la policía en las protestas en el aeropuerto. Con el paso de las semanas, la salud de Rosalino Flores se siguió deteriorando y con fecha 31 de enero *La República* informa que el joven fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza de Lima, donde se encontraba en estado crítico, pues al paciente solo se le pudo quitar 9 de los 36 perdigones que recibió⁴.

Asimismo –y como se ha visto en páginas anteriores–, varias semanas después, el 31 de enero, cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande del distrito de Písac se vieron involucrados en un incidente en la avenida de la Cultura del Cusco, cuando se arrojaron piedras contra autobuses de transporte urbano, llegando a romper el vidrio de una ventana de una de esas unidades. Por estos sucesos, Ferdinand Huaccanqui Yucra de 32 años, Richard Camala Coyo de 22 años, David Hivallanca Huamán de 20 años y Redy Huamán Camala de 22 años fueron sentenciados el 27 de febrero a nueve meses de prisión preventiva.

Un caso que alcanzó notoriedad nacional fue el de Cirilo Jara Mamani, dirigente de la ronda campesina de la comunidad de Tinke en Quispicanchis, quien fue detenido en Lima el 31 de enero junto a la profesora de Andahuaylas Yaneth Navarro Flores cuando ambos participaban en una marcha en los alrededores del aeropuerto Jorge Chávez. La acusación que se le hizo a Cirilo Jara fue la de participar en disturbios y financiar las movilizaciones, pues portaba 2300 soles y un par de hojas con anotaciones del dinero entregado a manifestantes de su zona para su alimentación o la curación de heridas. Por tal razón, la fiscalía pidió tres años de prisión preventiva para el dirigente campesino. Sin embargo, con fecha 19 de febrero Cirilo Jara fue liberado y se dictaminó su comparecencia restringida y una caución de 5000 soles mientras se desarrollen las investigaciones.

4 El 21 de marzo, en el Hospital Arzobispo Loayza de Lima, Rosalino Flores García finalmente falleció producto de las graves heridas recibidas.

La abogada Cricia Ochoa Huamantica, con maestría en Derecho Civil y asesora de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC), al ser entrevistada realizó una evaluación de la vulneración de los derechos humanos durante las movilizaciones y precisa que las fuerzas del orden hicieron un uso desmedido de la fuerza en la represión de las manifestaciones, violando lo estipulado en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en cumplimiento de su finalidad institucional. Esta abogada añade que, en lugar de cumplir con la función tuitiva de la población, la PNP actuó en algunos casos con brutalidad, como el día 11 de enero, cuando la intervención de las fuerzas del orden se saldó con un fallecido y 42 heridos, varios de ellos de gravedad.

Cricia Ochoa llama la atención, asimismo, sobre el uso de las instituciones para perseguir a los dirigentes y manifestantes, señalando que varios de ellos enfrentan denuncias por extorsión, usurpación y disturbios. Se da el caso también de dirigentes que han recibido exhortos de las fiscalías en los que se les notifica que están prohibidos de participar en manifestaciones y protestas.

Según la entrevistada, un claro caso de abuso de la Fiscalía y del Poder Judicial sería el de los jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande, en cuyo proceso se violó el principio de proporcionalidad que debe tener toda actuación judicial. La pena de nueve meses de prisión preventiva no se condice, en palabras de la abogada, con los hechos protagonizados, que consistieron en la ruptura de la ventana de un vehículo sin que se haya producido daños a la salud y la vida de las personas. Es más, los jueces justificaron su medida señalando que los jóvenes carecen de arraigo, cuando en realidad viven con sus familias en la comunidad de Cuyo Grande. Por otro lado, en un intento de criminalizar las protestas, en los interrogatorios a los que fueron sometidos, se buscó que los acusados inculparan a sus dirigentes comunales por organizar y protagonizar las protestas.

A pesar de todo lo manifestado, esta abogada llama la atención sobre el hecho de que en el Cusco se dieron niveles de coordinación entre las autoridades policiales y de la Fiscalía con los dirigentes de las organizaciones sociales, en particular de la FDCC. Se llegó así a un acuerdo por el que la dirigencia garantizaba que las marchas serían pacíficas y la

policía se comprometía a acompañarlas. Este acuerdo explica justamente por qué durante las primeras semanas las movilizaciones fueron más bien pacíficas. El uso de la fuerza, según la entrevistada, empieza a raíz del fallecimiento de Remo Candia Guevara. Gracias al acuerdo mencionado, sin embargo, en el Cusco la represión policial no alcanzó los niveles de brutalidad que se ha visto en otras regiones.



6

Conclusiones y recomendaciones



6.1. Protagonismo de las marchas

Las entrevistas a dirigentes de las provincias de Canchis, Calca, La Convención y Cusco dan cuenta de un marcado protagonismo de las comunidades campesinas y en general de los sectores rurales en las movilizaciones. Al mismo tiempo, se destaca la participación de organizaciones urbanas, como comerciantes de mercados y asociaciones de mototaxistas, las que, bien vistas, son también de raíces indígenas.

La presencia de comunidades y rondas campesinas es más notoria en el caso de la provincia de Canchis y del distrito de Písac. Es lo que señalan para Canchis la activista Gloria Pilares y el periodista Denis Hualla, este último haciendo hincapié en el protagonismo de las comunidades de los distritos de Checacupe, Tinta y Combapata. Por su parte, el comunicador Faustino Pacco reivindica el accionar de las doce comunidades campesinas del distrito de Písac. El dirigente Freddy Ramírez hace lo mismo para el caso de la provincia de Calca, mencionando particularmente a juntas de regantes, rondas campesinas y la Federación Provincial de Campesinos.

Estas apreciaciones coinciden con las de varios analistas, como Rodrigo Montoya, Ramón Pajuelo y Víctor Caballero, sobre cuyos planteamientos volveremos más adelante.

6.2. Las demandas de naturaleza política

Un hecho inédito en la historia reciente del país es que en las movilizaciones de diciembre, enero y febrero solo se levantaron demandas

políticas. Tan es así que algunos entrevistados, como Marco Olazábal, incluso puntualizan que no se quiso mezclar exigencias de otro tipo en las plataformas de lucha, que básicamente consignaron en todas las provincias la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, así como la convocatoria a una asamblea constituyente. Los continuos llamados de la presidenta Boluarte y sus ministros a que las organizaciones involucradas en las protestas presenten demandas de corte social que supuestamente sí podrían ser atendidas por el gobierno no hicieron más que exacerbar los ánimos de los manifestantes, quienes con toda razón consideran que nuestro ordenamiento jurídico garantiza su derecho a la participación política.

Este aspecto de las movilizaciones es el que más ha llamado la atención de los especialistas. Así, el antropólogo Rodrigo Montoya manifiesta que estamos ante

[...] la **primera rebelión abiertamente política de las comunidades quechuas y andinas de nuestra historia** después de su participación en la revolución de Túpaq Amaru, Túpaq Katari y Tomás Katari. No se trata de una reivindicación puntual como la de la tierra, para que las comunidades recuperen sus tierras expropiadas por las haciendas, para que los siervos se queden con sus parcelas y no trabajen más para los hacendados; tampoco se trata de una reivindicación simple para defender tierras comunales frente a la voracidad de las empresas multinacionales y nacionales solamente como en Bagua. Es la protesta masiva en calles y carreteras del sur andino y del centro y oriente del país y en Lima. Tiene por objeto lograr principalmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Se trata del arreglo de cuentas más fuerte con el limeñismo del país, con todos sus racismos y menosprecios. (Montoya, 2023; el énfasis es del autor)

6.3. Formas de organización, financiamiento y liderazgos

Tras la destitución del presidente Castillo y el nombramiento en el cargo de Dina Boluarte el 7 de diciembre, en muchos lugares, como Canchis, Calca y La Convención, los pobladores se juntan en las plazas casi el mismo día para protestar de manera espontánea. Como señala Freddy Ramírez, del Frente de Defensa de Calca, las personas, sobre todo

comuneros, se le acercaban y le preguntaban: “*Imatan ruwasunchis?*” (“¿Qué vamos a hacer?”), “¿Vamos a mirar nomás?”, como se ha relatado. Esta espontaneidad se convirtió al mismo tiempo en la fuerza y en el flanco débil de las movilizaciones que irían aumentando en intensidad y magnitud en las semanas siguientes.

En efecto, si bien a nivel local las organizaciones, principalmente los frentes de defensa, pudieron coordinar acciones y conformar comités de lucha, esto no se dio a nivel regional y menos nacional. Sobre esto incide la mayoría de entrevistados y algunos, como Mario Herrera, de Calca, extraen lecciones señalando que es necesario fortalecer las organizaciones y la coordinación entre estas. Por su parte, Gloria Pilares, de Sicuani, percibe una crisis de liderazgo que ha desnudado a dirigentes que asumen cargos solo por un afán de figuración, sin estar preparados para las tareas que deben desempeñar. Asimismo, según ella, se ha adolecido de falta de organicidad en los gremios locales y tampoco se ha tenido la capacidad de informar sobre las causas y objetivos de la lucha que se estaba desarrollando. “*Mana yachanichu*” (“No sé qué hacer”) –sería la frase que resume esta problemática–.

Esto, que fue una gran debilidad de las movilizaciones a nivel de las provincias, se repite a escala regional y sobre todo nacional. Leonela Labra, de la FUC, explica que en la región del Cusco se trató de formar una mesa que pudiese unificar las fuerzas de los trabajadores, estudiantes y de diferentes sectores, pero lo único que se alcanzó fue un liderazgo que quedó en una mera coordinación. Según ella, tampoco se pudo consolidar el liderazgo por regiones, por macro regiones y a nivel nacional. Se estuvo pues ante organizaciones débiles que muchas veces fueron sobrepasadas por sus bases.

Un aspecto a tomar con pinzas en las entrevistas es el de las reiteradas referencias a la “autoconvocatoria” de las movilizaciones. Es cierto que esto hace referencia a la espontaneidad de las protestas, sobre todo durante los primeros días, pero también parece responder a una estrategia de las dirigencias para defenderse de la criminalización. Se debe comprender que muchos dirigentes fueron objeto de denuncias fiscales por disturbios, usurpación y otros cargos.

Asimismo, un caso particular es el de la manera de ejercer el liderazgo en las comunidades campesinas, asunto sobre el que se extendieron

algunos entrevistados. Estos hicieron hincapié en los mecanismos de toma de decisiones de las comunidades indígenas, lo cual ocurre siempre en las asambleas comunales por mayoría. Estas decisiones luego son respetadas por todos los comuneros y las multas son percibidas como una manera de garantizar la acción colectiva y no como mecanismo de coerción. Se trata del principio que Rodrigo Montoya denomina “mandar obedeciendo” y que según explica es un modo de realización de la reciprocidad indígena en la esfera de la organización y la gestión política.

No por gusto en los ayllus-comunidades de Puquio, Lucanas, Ayacucho, en febrero, los alcaldes varas, las vísperas de los puqllay (juegos-carnavales) ofrecían una fiesta de gratitud a sus ayllus por haberles dado el honor de ser sus autoridades por un año, sin reelección inmediata posible. (Montoya, 2023)

Un hecho que se reivindica en varias entrevistas, y que también se pudo constatar al hacer el seguimiento de las movilizaciones, es que los recursos para las ollas comunes y los traslados al Cusco y a Lima provinieron de colectas públicas y donaciones. En el caso de Calca, por ejemplo, según informaron radios locales y recogió la socióloga Eleana Llosa (2023), el monto recaudado fue de 17 160 soles y provino de las JASS con 2700 soles, las juntas de regantes con 6830; el Frente de Defensa con 1050 y la gente en general con 6580 soles. Se informó, asimismo, que el autobús de ida y vuelta costaría 10 000 soles y la estadía por día para una persona 40 soles. En la ciudad del Cusco, durante varias semanas la plaza Túpac Amaru fue escenario de una olla común que funcionaba gracias a los donativos que se recibían allí mismo, en dos carpas donde se almacenaba los productos. Además, organizaciones como la FUC promovieron la realización de conciertos solidarios para la recolección de fondos.

Sobre estos aspectos de las movilizaciones, el sociólogo Víctor Caballero Martín ha escrito:

En estos días de intensa lucha, hemos visto tanto en Puno como en Cusco, Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica, la presencia de delegaciones representando a sus regiones, provincias, comunidades o nacionalidad (como los Chopcas de Huancavelica), quienes vienen con el respaldo económico y solidario de su comunidad o parcialidad, y también de sus asociaciones de residentes de las ciudades, particularmente de Lima. No es la primera vez que esto sucede, en las primeras décadas del 1900, el Perú se vio sacudido por las

rebeliones indígenas en el sur andino. Los articuladores de las movilizaciones eran los denominados “mensajeros andinos” que desempeñaron una intensa actividad para visibilizar sus luchas. (Caballero, 2023)

6.4. El pedido de asamblea constituyente

Una exigencia que formaba parte de las plataformas de lucha era el pedido de convocatoria a una asamblea constituyente. Las entrevistas muestran, sin embargo, que más allá de reclamar que esta asamblea sea pluricultural, no hay mayor desarrollo de los temas de relevancia que debería contemplar una nueva constitución. En algunos casos se aclara, sí, que las organizaciones están empezando a debatir el contenido de esta exigencia.

Se podría decir pues que estamos ante una demanda que por ahora se mantiene en el plano simbólico, pero que no por ello deja de ser importante. Al contrario, en tanto se trata finalmente de un llamado a refundar el Estado y el pacto social que lo sostiene, el reclamo de una nueva constitución es quizás el de mayor relevancia de las movilizaciones.

Varios analistas son de una opinión parecida y la sustentan con argumentos que se complementan entre sí. Ramón Pajuelo, por ejemplo, partiendo del análisis de las regiones históricas del país, destaca como una de las más importantes la del sur andino, de carácter fuertemente indígena, y añade:

Como esta se trata de una crisis que ha desmontado capas de demandas y entre ellas demandas profundas de pertenencia al país, la región del Sur Andino es la que ha terminado desembalsando una enorme protesta campesino-indígena que apunta a las formas de construcción de la república y de la nación peruana. (Roca Rozas, 2023)

Por su parte, Rodrigo Montoya, imaginando cómo podría ser esa nueva república, manifiesta lo siguiente:

Cuando sea posible un nuevo sistema político pensado a partir del conocimiento profundo de la realidad peruana y no como una simple copia del modelo occidental, una de sus mayores originalidades será el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades como unidades colectivas y de su representación política en tanto comunidades y/o

pueblos-naciones-patrias-culturas-lenguas y su articulación con el voto de sujetos individuales fuera de las comunidades. (Montoya, 2023)

Desde una perspectiva muy distinta, la de la organización económica del país, Efraín Gonzales de Olarte (2023) señala que nuestro país está organizado social, política y económicamente como un sistema centro-periferia, con Lima como centro y el resto del país como periferia, pero esto se replica en cada región donde las capitales son el centro y las ciudades más pequeñas y el espacio rural las periferias. De acuerdo a esto, la lectura que hace el economista de las protestas es que estas configuran “una rebelión de la periferia” y añade que

[...] la simbólica “toma de Lima” en realidad habría que interpretarla como la necesidad de la periferia de ser escuchada por el centro. Por ello, las marchas han convertido a la periferia en un actor político que espera una respuesta del centro, del gobierno, del Estado, en una coyuntura especialmente crítica, en la que se puede definir el destino del Perú y de la mayoría de nosotros, sobre todo de los que viven en las periferias, que son los más pobres. (Gonzales de Olarte, 2023)

6.5. Trascendencia del estallido social

Más de dos meses de intensas movilizaciones en la mayoría de provincias de la región Cusco, incontables paros secos que provocaron el cierre de los comercios y mercados y la ausencia de transporte público, así como finalmente los bloqueos de las principales carreteras que conectan la región con la costa y las regiones vecinas y que provocaron un dramático desabastecimiento de productos alimenticios y de combustibles, dan cuenta de un estallido social sin precedentes en la historia reciente. En algunas regiones, como Puno, Arequipa y Apurímac, este estallido alcanzó magnitudes igual de intensas o incluso mayores.

Varios entrevistados manifiestan que la escalada de las protestas fue detonada por las sucesivas matanzas en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca. Aparte de ello, sin embargo, parece ser demasiado pronto para que los protagonistas de este estallido social se aboquen a un análisis de su trascendencia, sobre todo porque al día de hoy se encuentran ocupados en replantear su lucha, mejorar los niveles de coordinación entre sus organizaciones a nivel regional y con las de carácter nacional y buscar

nuevas estrategias de movilización que no los coloquen en riesgo de ser criminalizados o reprimidos duramente. Por lo mismo, recurrimos a la mirada externa de los especialistas, haciéndonos cargo de las limitaciones o sesgos que pueden tener para abordar este punto.

Para Ramón Pajuelo, este estallido social significa que

[...] estamos viendo un momento histórico, de desembalse de protestas largamente contenidas. El Perú fue escenario de una reforma agraria muy radical en 1969 y ya cumplió medio siglo. Esta reforma distribuyó la tierra, más no distribuyó la igualdad. La igualdad en tanto personas, en tanto ciudadanos, en tanto miembros de una comunidad política llamada Perú. Eso que ahora estamos viendo es una situación de estallido social que apunta al fondo del modo de construcción de la república y de la nación peruana. (Roca Rozas, 2023)

Por su lado, el sociólogo Omar Coronel (2023) parte de señalar que el actual estallido social es distinto a otros de la historia reciente del país, como las marchas que provocaron la caída del gobierno de Manuel Merino o la “Marcha de los cuatro suyos” contra la dictadura de Alberto Fujimori. A continuación, Coronel marca distancias con quienes consideran que estamos ante un gran movimiento popular de masas campesinas y obreras “que se habrían levantado para tumbar el neoliberalismo y construir un nuevo Perú”.

Seguidamente, reconociendo que el actual estallido social seguramente engloba muchos componentes, como un despertar antineoliberal y los gérmenes de un movimiento social pluricultural, Coronel plantea que lo que define el actual estallido social es su profunda heterogeneidad, pues involucra a distintos actores sociales, desde organizaciones que apoyaron a Castillo durante su gobierno (sea de nivel nacional, como la CGTP, la CNA y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, Fenatep, sea de carácter rural o urbano-marginal, como comunidades campesinas, juntas de regantes y asociaciones barriales) hasta movimientos vinculados a los derechos humanos, movimientos indígenas, grupos religiosos, ONG y colectivos contraculturales. No deja de lado Coronel a los actores vinculados a economías informales o ilegales, como los mineros de Chala (Arequipa) y La Pampa (Madre de Dios).

La conclusión a la que llega este autor es que la marcada heterogeneidad del estallido social es un reflejo de la fragmentación de las organizaciones sociales que se arrastra desde los años noventa del siglo pasado. Para Coronel,

[...] a diferencia de los años 1970s, no hay grandes movimientos y organizaciones sociales dirigiendo las movilizaciones. En contraste con la Marcha de los Cuatro Suyos del 2000, no tenemos partidos nacionales que lideren y centralicen la lucha. Más aun, a diferencia del estallido del 2020, aquí los protagonistas no son las juventudes urbanas –sobre todo limeñas–, sino las comunidades rurales y campesinas del interior del país. Son sobre todo colectivos bien organizados, con tradición asambleísta, pero a nivel local. No hay entonces la estructura organizativa o convergencia de motivos que, desde distintos ángulos, asumen tanto izquierdas como derechas. (Coronel, 2023)

Un hecho que sin duda preocupa grandemente al conjunto de la sociedad peruana es si en este momento –la primera quincena de marzo–, estamos ante la pérdida de fuerza de las movilizaciones y protestas y un retorno a una relativa tranquilidad o solo ante un reflujo de las mismas. Ramón Pajuelo sobre este crucial asunto opina:

[...] ya hemos tenido dos meses de movilizaciones y estamos en un escenario de confrontación abierta en donde las cosas no se resuelven de un tirón, sino que dependen de las correlaciones de fuerza y de los procesos que vayan desarrollándose como parte de este momento de confrontación. (Roca Rozas, 2023)

Y luego augura que “vamos a tener en las próximas semanas y meses un siguiente momento de movilización en este ciclo de protestas en el país y un nuevo momento de presencia en Lima”.

Por su parte, Omar Coronel piensa que “lo más probable es que la protesta se mantenga de forma ondular, con subidas y bajadas, hasta que aparezca algún tipo de válvula de escape”. Seguidamente, volviendo sobre el carácter político de las movilizaciones, puntualiza:

[...] el hecho de que la represión letal sea más probable en los territorios con población indígena, junto a la carga clasista, racista y centralista del discurso político y mediático

que criminaliza o invisibiliza a los manifestantes vivos y muertos, ha reavivado los hondos y mortales desencuentros del Perú. Irónicamente, son los actores del establishment –y no los partidos de izquierda– quienes han actualizado la rabia antisistema. Esto ha hecho que por primera vez en mucho tiempo las protestas políticas sean más numerosas que las sociales. Han politizado el descontento. (Coronel, 2023)

Colocándose en una perspectiva de más largo plazo, que lo lleva a mirar las rebeliones indígenas de las primeras décadas del siglo XX, así como el proceso de la reforma agraria que se inicia con las tomas de tierras de fines de los años cincuenta y culmina con la reestructuración de las empresas asociativas en 1989, el sociólogo Víctor Caballero (2023) considera que “es muy normal que en los análisis de los conflictos sociales se confundan los momentos del estallido social con el periodo subsecuente que da inicio a un movimiento social de larga y profunda trascendencia”, cuando en realidad, en sus palabras, “los procesos sociales no son expresión de un día, un mes o un año”.

A falta de certezas, cerremos este punto volviendo a la palabra de los entrevistados. Me refiero a lo manifestado por el experimentado dirigente de Calca Mario Herrera, quien, haciendo un balance de las movilizaciones, manifiesta: “Se ha mostrado que Lima no es el Perú, que el Perú es una suma de pueblos”.

6.6. Polarización en la sociedad, actitudes racistas y clasistas

La mayoría de entrevistados se quejan del racismo y clasismo que debieron enfrentar durante las movilizaciones, no solo en Lima, sino en sus propias provincias de origen, como Canchis y Calca. Esto mismo se pudo constatar en el Cusco haciendo un seguimiento de las marchas que llegaban a la ciudad desde las diversas provincias y revisando lo que se publicaba en redes sociales. Hubo personas, por ejemplo, que posteaban en Facebook avisos maniqueos como el siguiente: “Los buenos somos más. Los malos son menos. Unidos acabamos con el mal. Organiza a tu barrio. Has [sic] respetar tu derecho al trabajo, a transitar libremente. ¡Tu familia es primero!”.

En esta misma línea, se organizaron en la ciudad del Cusco, así como en Calca y Sicuani, varias marchas por la paz, la primera de ellas todavía

el 19 de diciembre y de la que da cuenta la Cartuc en su página oficial de Facebook con siete fotografías. El 3 de enero, siempre según el Facebook de la Cartuc, los gremios de turismo se plegaron a la Gran Marcha por la Paz convocada en un inicio por la PNP. El 9 de enero, la Cartuc anuncia un plantón autoconvocado del sector turismo en la plaza Túpac Amaru. Y el 13 de enero finalmente en esta página se sube un video de casi dos horas de duración en el que se puede apreciar, a partir del minuto 50, enfrentamientos entre quienes marchan por la paz y delegaciones que llegan de provincias para protestar.

Por otra parte, los numerosos comunicados de la Cámara de Comercio del Cusco, oportunamente presentados, dan cuenta de una sintonía entre los argumentos de este gremio empresarial y los del gobierno de Dina Boluarte en relación a las movilizaciones. Así, por ejemplo, la Cámara, al tiempo que condena los actos de violencia que está sufriendo el país, sale en defensa del gobierno de Dina Boluarte señalando que es fruto de “una salida constitucional que todos debemos respetar al margen de nuestras preferencias políticas”. Las marchas a los aeropuertos, a la vez, son percibidas, en la línea del gobierno, como actos de guerra contra nuestro país que deben ser condenados y reprimidos. En general, los llamados a una mayor represión son permanentes en los comunicados de la Cámara.

Asimismo, en dichos comunicados se repite el discurso gubernamental en el sentido de que las marchas son financiadas por la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico. En este contexto, los campesinos, para los empresarios representados en la Cámara, son engañados por azuzadores políticos que les inculcan el odio entre peruanos.

El ex ministro de Turismo Rogers Valencia, en la entrevista que nos concedió, abunda por su parte en el argumento de la victimización que explicaría el comportamiento de buena parte de la población movilizada. Como se señaló, para Valencia, quien se siente victimizado solo tiene dos opciones: o sufrir o atacar propiedad privada. Desarrollando este argumento, el empresario precisa que la victimización es una enfermedad social y la manera de frenarla es con un Estado gestor y que actúa con transparencia.

En suma, en la sociedad regional se constata una marcada polarización entre quienes protestan contra el gobierno y quienes lo apoyan, al extremo de que otra líder empresarial, Silvia Uscamayta, habla del

desencuentro entre ciudadanos y ciudadanas. “No hay tolerancia, cada quien hace valer su opinión. Se han deteriorado las relaciones entre las personas” –puntualiza–. Para esta empresaria, la polarización es agravada por el papel que está jugando la prensa a nivel nacional y local y por la posición de la presidenta Dina Boluarte, que abre heridas, cuando lo que se necesitaría es tender puentes y propiciar espacios de diálogo.

6.7. Participación de la mujer

La activista Gloria Pilares, de Sicuani, fue enfática en señalar que en estas movilizaciones la participación de la mujer ha sido mayor que en otras oportunidades. Para apuntalar esta afirmación, señala que las mujeres también formaron parte de las delegaciones que viajaron a Lima, sobre todo en el caso de Canchis, Canas y Espinar, y menciona la experiencia de Tribunales Abiertas en la plaza principal de Sicuani. Esta experiencia consiste en que las mujeres, tanto en representación de organizaciones como a título personal, se reúnen en la plaza de la ciudad para expresar su opinión sobre la actual coyuntura.

Se puede afirmar, asimismo, que las movilizaciones han propiciado el surgimiento de nuevos liderazgos femeninos en la región. El más notorio es el caso de Leonela Labra, la presidenta de la FUC. Leonela es hija de maestros y, como se dijo, estudiante de los últimos ciclos de Historia. Sus vacaciones ella las pasaba en su natal Espinar, en casa de sus abuelos, en la comunidad campesina de Patillani Bajo. Ella recuerda que acompañaba a su abuelo a las asambleas comunales y allí veía la organización de la comunidad. A raíz de su viaje a Lima encabezando la delegación de la FUC, Leonela alcanzó notoriedad nacional y ha brindado entrevistas a numerosos medios, entre ellos al reconocido periodista Marco Avilés del portal “Salud con lupa” en Facebook.

En conclusión, podríamos señalar, como lo hace Gloria Pilares, que en la coyuntura del estallido social las mujeres ahora están en un proceso de discusión sobre la asamblea constituyente, para informarse y empoderarse.

6.8. Vulneraciones de los derechos humanos

La represión de las protestas en el Cusco y otras regiones del país en ocasiones ha alcanzado niveles de brutalidad que han llamado la atención tanto de los organismos internacionales como de organizaciones que velan por el respeto de los derechos humanos. Ha sido el caso de Amnistía

Internacional (AI) y de la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA). Así, por citar solo el de AI, como se informó profusamente en medios internacionales hacia mediados de febrero, este organismo presentó un informe preliminar en el que denuncia que “en Perú se vienen produciendo graves violaciones a los derechos humanos, con ataques generalizados contra la población y el uso de armas letales contra las manifestaciones” (Amnistía Internacional, 2023). En este informe, además, especifica que “el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza represiva tiene un alto contenido racista contra las poblaciones indígenas andinas”.

En el caso particular del Cusco, los sucesos más graves se suscitaron el día 11 de enero, tras la masacre del día 9 en Juliaca, y se saldaron con un manifestante muerto y 42 heridos. El dirigente Walter Torres, de la Fartac, ha deplorado que las oficinas de la Fiscalía y el Poder Judicial, encargadas de implementar políticas de integración intercultural que favorezcan a las comunidades indígenas, no realizaran ningún tipo de actuación ante los abusos policiales.

Por su parte, la abogada Cricia Ochoa Huamantica precisa que las fuerzas del orden hicieron un uso desmedido de la fuerza en la represión de las manifestaciones, violando lo estipulado en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP. Esta abogada llama la atención, asimismo, sobre el uso de las instituciones para perseguir a los dirigentes y manifestantes, señalando que varios de ellos enfrentan denuncias por extorsión, usurpación y disturbios.

Con todo, Cricia Ochoa concluye que en el Cusco se dieron niveles de coordinación entre las organizaciones sociales y las autoridades policiales y se llegó a un acuerdo para garantizar que las manifestaciones fuesen pacíficas. Esto contribuyó a que en el caso del Cusco la represión policial no alcanzara los niveles de brutalidad que se ha visto en otras regiones.

6.9. Desafíos para una participación política democrática

En este último punto haremos un somero repaso de los vaivenes de la participación política (electoral) indígena en nuestra república y de los desafíos que enfrentamos para mejorarla. Sobre lo primero, la socióloga Alicia del Águila (2012), señala tres periodos bastante diferenciados. Desde 1821 hasta 1896, se manejó fórmulas corporativas para facilitar

cierto grado de participación electoral de los indígenas. Una reforma electoral de 1896 impuso como requisito excluyente para ejercer la ciudadanía el saber leer o escribir, con lo cual la gran mayoría de la población indígena quedó excluida de este derecho. Con la Constitución de 1979, finalmente, se aprobó el derecho universal al sufragio y se produjo un “desborde ciudadano” con el acceso al voto de la población analfabeta de las áreas rurales andinas y amazónicas.

El voto universal por sí solo, sin embargo, no ha cerrado las brechas enormes derivadas de la diversidad étnica. El politólogo Iván Lanegra, en su libro *La travesía democrática*, que forma parte de la colección Nudos de la República del Proyecto Bicentenario, recurre al concepto de “ciudadanías incompletas” para referirse a ello, precisando:

[...] la realidad peruana sigue estando atravesada por una fuerte asimetría de poder que afecta en distinto grado a cada uno de los 55 pueblos indígenas que el Estado peruano ha reconocido formalmente; y también a otros sectores, en particular, la población afroperuana. (Lanegra, 2021)

Para explicar esto, Lanegra hace referencia a la actuación del parlamento que prioriza la defensa de intereses particulares por encima de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en relación con los recursos naturales.

La conclusión a la que llega Iván Lanegra es que resulta necesario discutir la transformación de la democracia y el Estado peruano de modo que reflejen la diversidad cultural y étnica del país. Estas transformaciones deberían avanzar en varias direcciones. Por un lado, es necesario ampliar los derechos especiales de representación política de las poblaciones indígenas. Por otro lado, se requiere transitar del reconocimiento de las comunidades nativas y campesinas al de la categoría de pueblos indígenas, con todos los derechos asociados a eso. Herramientas para trabajar esto último pueden ser los “territorios indígenas”, el “autogobierno indígena” y los “planes de vida”, que debieran ser reconocidos en la Constitución. En tercer lugar, este politólogo manifiesta que “la esfera de autogobierno indígena es un camino para enlazar el régimen democrático a nuestra realidad multicultural y pluriétnica, así como una oportunidad para reducir las asimetrías del poder, promoviendo el respeto mutuo intercultural”. La discusión de una nueva constitución abriría las posibilidades de plasmar todas estas reformas.

Fuentes

1. Entrevistas a dirigentes gremiales y líderes empresariales del Cusco

Dueñas García, Juvenal. Secretario general de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Calca (Calca, 28 de febrero de 2023).

Galindo Laime, Royer. Secretario general del Frente de Defensa de Canchis y vicepresidente del Comité de Lucha de la Provincia de Canchis (Sicuani, 22 de febrero de 2023).

Herrera Hidalgo, Mario. Delegado del Frente de Defensa de Calca ante el Comité Coordinador de Organizaciones Sociales de Cusco (Calca, 28 de febrero de 2023).

Hualla Vega, Denis. Comunicador social (Sicuani, 22 de febrero de 2023).

Ochoa Huamantica, Cricia. Asesora *ad honorem* de la FDCC (Cusco, 6 de marzo de 2023).

Olazábal Echegaray, Marco Antonio. Secretario de organización del SUTE La Convención (Cusco, 3 de marzo de 2023).

Pacco Pacco, Faustino. Comunicador social de la comunidad de Paru Paru, Písac (Cusco, 23 de febrero de 2023).

Pilares Suyo, Gloria Joaquina. Presidenta colegiada del Consejo Regional de la Mujer Cusco (Sicuani, 22 de febrero de 2023).

Ramírez Ocoña, Freddy. Secretario general del Frente de Defensa de la Provincia de Calca (Calca, 1 de marzo de 2023).

Torres Orcón, Wálter. Presidente de la Fartac (Cusco, 28 de febrero de 2023).

Uscamayta Otárola, Silvia. Empresaria de turismo (Cusco, 27 de febrero de 2023).

Valencia Espinoza, Rogers Martín. Empresario de turismo (Cusco, 24 de febrero de 2023).

2. Referencias bibliográficas

Amnistía Internacional. (25 de marzo de 2023). *Perú: Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú*. Amnistía Internacional. <https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/6761/2023/es/>

Caballero Martín, V. (7 de febrero de 2023). Nuevos tiempos, nuevas esperanzas. Noticias Ser.Pe. <https://www.noticiasser.pe/nuevos-tiempos-nuevas-esperanzas>

Coronel, O. (2023). Ni revolución ni barbarie. La complejidad del estallido peruano. *Revista Ideele*, (308).

- Del Águila, A. (2012). Historia del sufragio en el Perú, s. XIX-XX: una lectura desde la ciudadanía y la participación indígena. En A. Del Águila, & M. Suito (eds.). *Participación electoral indígena y cuota nativa en el Perú. Aportes para el debate* (pp. 17-36). Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y Jurado Nacional de Elecciones.
- Gonzales de Olarte, E. (25 de febrero de 2023). La rebelión de las periferias. *La República*. <https://larepublica.pe/opinion/2023/02/25/la-rebelion-de-la-periferia-por-efrain-gonzales-de-olarte-1707375>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. (2018). *Censos nacionales 2017. Cusco. Resultados definitivos*, t. I. INEI.
- Lanegra, I. (2021) *La travesía democrática. La democracia y el bicentenario*. Serie Nudos de la República. Bicentenario Perú 2021.
- Llosa, E. (2023). El movimiento social en Calca, Cusco. Etnografía de diciembre de 2022 a marzo de 2023. Inédito.
- Montoya, R. (8 de febrero de 2023). Primera rebelión política en los últimos doscientos años. *La Mula*. <https://navegarriarriba.lamula.pe/2023/02/08/primera-rebelion/rodrigomontoyar/>
- Roca Rozas, R. (febrero de 2023). Entrevista a Ramón Pajuelo. La comunidad es una instancia de poder y autoridad colectiva. *Sur. Semanario de Política y Cultura*, I(3). https://issuu.com/sursemanario/docs/semanario_sur_n_03

3. Informativas

Periódico *El Diario del Cusco*

Revista "Pulso regional"

Páginas web: Cámara de Comercio del Cusco y Cartuc

Páginas de Facebook: Cartuc, Denis Hualla Vega, "Salud con lupa" y "Voz campesina"

Instagram: "Cusco en portada", Denis Hualla Vega y Ninoska Montúfar Becerra

Siglas

AATC	Asociación de Agencias de Turismo de Cusco
AI	Amnistía Internacional
APV	Asociación pro vivienda
Cartuc	Cámara Regional de Turismo de Cusco
CCL	Consejo de Coordinación Local
CCP	Confederación Campesina del Perú
CCR	Consejo de Coordinación Regional
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú
CNA	Confederación Nacional Agraria
Coremuj	Consejo Regional de la Mujer
Cunarc	Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú
DC	<i>El Diario del Cusco</i>
FAE	Fondo de Apoyo Empresarial
Fartac	Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco
FDCC	Federación Departamental de Campesinos del Cusco
FDTC	Federación Departamental de Trabajadores del Cusco
Fenatep	Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú
Fepcacyl	Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares
FUC	Federación Universitaria Cusco
Fudic	Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis
JASS	Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
msnm	Metros sobre el nivel del mar
Ocajimp	Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público
OEA	Organización de Estados Americanos
OGD	Organización de Gestión de Destino
Onajup	Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena
ONG	Organismo no gubernamental
ONU	Organización de Naciones Unidas
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros
PNP	Policía Nacional del Perú
PR	Pulso regional
Sute	Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación
WOLA	Oficina en Washington sobre América Latina (por sus siglas en inglés)

Socios del Grupo Propuesta Ciudadana



📞 998 342 992

✉️ contacto@propuestaciudadana.org.pe

🌐 www.propuestaciudadana.org.pe

📍 Jr. María Parado de Bellido 150, Magdalena del Mar, Lima

✕ @prop_ciudadana

📘 📷 grupopropuestaciudadana

📺 📺 Grupo Propuesta Ciudadana